

LAS CLÍNICAS JURÍDICAS COMO MÉTODO DE APRENDIZAJE Y COMO SERVICIO SOCIAL

Trabajo Fin de Grado. Grado en Derecho

Facultad de Derecho

Junio 2019

Trabajo realizado por Margarita Calo Granado

Tutorizado por Pfr^a. Dr^a. Emilia Girón Reguera

ÍNDICE

Resumen - Abstract	3
I. Introducción	4
II. La enseñanza clínica en el Derecho	5
II.1. El origen de las clínicas jurídicas.....	5
II.2. Concepto y características de las clínicas jurídicas.....	8
II.3. Funciones de la educación jurídica clínica.....	9
A. Un laboratorio para el aprendizaje del derecho.....	11
B. Un servicio a la sociedad: el voluntariado jurídico.....	12
II.4. Modelos de clínicas legales.....	13
III. La enseñanza jurídica clínica en las universidades españolas	15
III.1. Clínicas jurídicas en España.....	15
III.2. La red española de clínicas jurídicas.....	16
III.3. El trabajo “pro bono”.....	20
III.4. La colaboración con los Colegios de Abogados.....	23
IV. La clínica jurídica de la Universidad de Cádiz como oficina de asesoramiento	26
IV.1. Colaboración CLINUCA con UCAYUDA: dos proyectos con vocación de servicio a la comunidad.....	29
IV.2. CLINUCA y los másteres universitarios de la UCA.....	29
V. Oportunidades y desafíos de las clínicas jurídicas: un largo camino a recorrer	31
Relación bibliográfica	33
Anexos:	
1. Propuesta de Convenio marco de colaboración entre el Consejo General de la Abogacía y la Conferencia de Rectores de las Universidades españolas en representación de las clínicas jurídicas de las Universidades españolas	36
2. Propuesta de Reglamento de Funcionamiento de CLINUCA.....	41
3. Formulario de contacto y funcionamiento CLINUCA.....	49
4. Carta de confidencialidad CLINUCA.....	50

RESUMEN

La educación jurídica clínica ha cobrado gran importancia en la formación de los juristas en las facultades de Derecho de todo el mundo revolucionando la forma de enseñar Derecho. El método de enseñanza clínico es un programa de aprendizaje basado en la prestación de asistencia jurídica por parte de estudiantes, supervisados por docentes o profesionales del Derecho. Así, los alumnos entran en contacto con la profesión que desempeñarán en el futuro, a la vez que prestan un servicio a la comunidad de manera altruista.

Este trabajo analiza la doble dimensión de las clínicas jurídicas: por un lado, como laboratorios para el aprendizaje del Derecho y, por otro, como un servicio a la comunidad; prestando especial atención a la Clínica Jurídica de la Facultad de Derecho, puesta en marcha en el actual curso académico 2018/2019.

PALABRAS CLAVE: Clínica jurídica, práctica legal, innovación docente, enseñanza clínica, Grado en Derecho.

ABSTRACT

Clinical legal education has gained great importance in the training of jurists in law schools around the world, as it has revolutionized the way law is taught. The clinical teaching method is a learning programme based on the provision of a service, in this case free legal assistance by pupils supervised by teachers or legal specialists. It is a way for pupils to get in contact with the profession they will be performing in the future, while at the same time they are providing a community service in an altruistic way.

This paper analyses the double dimension of legal clinics: on the one hand, as laboratories for learning the law and, on the other, as a service to the community; it pays special attention to the Legal Clinic of the Faculty of Law, launched in the current academic year 2018-2019.

KEY WORDS: Legal clinic, legal practice, teaching innovation, clinical legal education, Law Degree.

I. INTRODUCCIÓN

La idea de crear una Clínica Jurídica nace de la necesidad de implementar la función social que tiene encomendada toda Universidad pública. La Clínica Jurídica es un espacio de aprendizaje donde los estudiantes que participen en la misma pondrán en práctica los conocimientos adquiridos a lo largo de los estudios del Grado mediante la realización de prácticas reales con personas y casos reales, siempre bajo el asesoramiento, tutorización y supervisión de profesores universitarios y profesionales del Derecho. Mediante esta metodología de trabajo, se consigue, por un lado, que los alumnos trabajen en la adquisición de las competencias y habilidades que debe tener todo profesional del Derecho; por otro, se pretende conseguir unos juristas comprometidos socialmente y sensibilizados con las desigualdades sociales y en la lucha contra las injusticias, es decir, obtener juristas con una mayor conciencia social.

CLINUCA, la denominación que ha recibido nuestra Clínica Jurídica, nace en el curso 2018-2019 como una actividad formativa complementaria a la que los alumnos se apuntan voluntariamente con posibilidad del reconocimiento de créditos ECTS. En nuestra clínica jurídica los casos más complejos sirven de base para la elaboración de Trabajos Fin de Grado y de Máster, que los estudiantes deben realizar para terminar sus estudios de grado y postgrado, y que consistirán en dictámenes e informes sobre las cuestiones planteadas.

Ambos términos, clínica jurídica y educación jurídica clínica, están vinculados al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y a la mejora y renovación en la docencia que éste ha impulsado. Desde sus inicios, la educación jurídica clínica ha estado vinculada a la asistencia jurídica gratuita y, por tanto, a la prestación de servicios y prácticas jurídicas gratuitas a las personas con menos recursos de nuestra sociedad. Este hecho pone de manifiesto la estrecha conexión que existe entre el movimiento clínico y la justicia social. Este vínculo se ha consolidado con el paso del tiempo y, a día de hoy, el movimiento de clínicas jurídicas está orientado a potenciar el vínculo del proceso de formación del jurista, con el compromiso por el interés público y la justicia social, implementando así la sensibilidad social del futuro profesional y fortaleciendo los valores éticos en los que se basa su profesión.

El objetivo de este trabajo es analizar las clínicas jurídicas como método de aprendizaje, pero también como servicio a la comunidad. Para ello, se han estudiado los orígenes de las clínicas y cómo han ido evolucionando a lo largo de los años hasta llegar a las clínicas instauradas en España, en concreto, a la clínica jurídica creada por la Facultad de Derecho de la Universidad de Cádiz. Se ha tomado como referencia principal la obra de Frank S. Bloch, *El Movimiento Global de Clínicas Jurídicas: Formando Juristas en la Justicia Social*, además de los artículos y publicaciones que se mencionan en la bibliografía, junto con la web de la Red Española de Clínicas jurídicas y la web ENCLE, destinada al movimiento internacional de clínicas jurídicas.

II. LA ENSEÑANZA CLÍNICA EN EL DERECHO

II.1. El origen de las clínicas jurídicas

Las clínicas jurídicas nacieron a finales del siglo XIX y principios del siglo XX en las Facultades de Derecho de Estados Unidos en base a unos programas de asistencia legal donde los estudiantes de las facultades de Derecho trabajaban como voluntarios. La propuesta de este modelo educativo basado, fundamentalmente, en la práctica y en la conexión con la realidad social, se atribuye al jurista norteamericano Jerome Frank, quien en un famoso artículo criticó el mundo académico de Norteamérica en los años treinta del siglo pasado, al estar basado en la exposición de casos. El método de casos, también denominado análisis o estudio de casos, tuvo su origen en 1870 en la Universidad de Harvard de la mano del profesor Christopher Columbus Langdell, con el objetivo de que los estudiantes de Derecho aprendieran leyes mediante el estudio de los casos a los que debían buscarles solución, en lugar de estudiar leyes de libros de texto. Esta forma de aprendizaje se formalizó hacia el año 1914 bajo el término “case system”.

Frank señalaba en su obra que el método de casos era negativo para los alumnos pues al estudiar libros de casos, únicamente prestaban atención a las resoluciones judiciales concretas para cada caso, sin observar las circunstancias que han llevado a los operadores jurídicos a adoptar dicha resolución. A su juicio, se trataba de un método que simplificaba el aprendizaje del Derecho, ya que los estudiantes que seguían el método de casos no observaban el lado humano de la administración de justicia, no atendían a los hechos ni a los métodos de negociación o resolución de conflictos, únicamente aprendían la decisión final. En su trabajo expuso que los estudios de Derecho habían fracasado por tres motivos. En primer lugar, porque la enseñanza se planteaba desde una perspectiva estática sin ser conscientes de que el Derecho es una materia en continua transformación para adaptarse a las necesidades jurídicas de la sociedad en cada momento. En segundo lugar, el Derecho se estudiaba como si fuera el final de un proceso en lugar de ser una herramienta para la consecución de un fin. En tercer lugar, los casos que se estudiaban en las aulas eran inventados con poca relación con el mundo cotidiano. Partiendo de la necesidad de copiar de las facultades de medicina la enseñanza práctica real, propuso que los alumnos trabajaran gratuitamente, siempre apoyados por sus profesores, en la solución de casos jurídicos reales que plantearían personas sin recursos suficientes para acceder a los servicios jurídicos. El nuevo sistema propuesto fue extendiéndose debido a que los profesores de las universidades norteamericanas comprendieron la importancia de enseñar a los estudiantes cómo ser abogados, a la vez que prestaban su ayuda a personas con escasos recursos para defender sus derechos e intereses. Los proyectos iniciales consistieron en la creación de un tipo de consultorios jurídicos, totalmente gratuitos, donde los estudiantes de Derecho conocían la realidad de la práctica de la profesión, junto con la dura realidad social que se estaba viviendo en ese momento.

Los precursores de la educación clínica fueron Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá y Australia, pues ellos sentaron las bases del movimiento clínico y favorecieron su expansión por todo el mundo.

A pesar de ser estos los precursores, es palpable que las clínicas de cada país han evolucionado de forma diferente. Esto podría justificarse debido a que la aparición de las clínicas normalmente va unida al desarrollo de los estudios jurídicos en los que influyen otros factores tales como las condiciones sociales de cada momento histórico, la regulación del Derecho, e incluso la existencia de diversos tipos de individuos y grupos influyentes. Estas primeras clínicas jurídicas se desarrollaron en los países anteriormente mencionados en los años 60, en un panorama de cambios sociales importantes tales como la descolonización, el movimiento hippie, los movimientos feministas, las primeras revueltas estudiantiles, la legalización de la homosexualidad en determinados países, los movimientos antirracistas, etc. Es decir, los años 60 fueron una década de revolución cultural y juvenil, de emergencia de nuevos movimientos sociales y, en general, la década de la democratización de la sociedad moderna.

Además de en estos países, el movimiento clínico se ha ido extendiendo por todo el mundo, llegando a África, el sudeste de Asia e India, Europa, América Latina e incluso a China y Japón. Por motivos de proximidad geográfica, vamos a centrarnos en los programas de enseñanza jurídica clínica en Europa para conocer su contexto histórico.

En Europa a lo largo del siglo XX tuvieron lugar una serie de transiciones de un régimen autoritario o totalitario hacia un sistema democrático con un marco institucional basado en el Estado de Derecho. A raíz de estos cambios, los países que lo sufrieron vieron afectados de forma significativa el estatuto de la profesión de jurista, pues su función se redujo a solucionar pequeños asuntos civiles y tratar cuestiones de criminalidad. Esto desembocó en la incapacidad de la abogacía, su falta de competencia y/o el rechazo a tratar asuntos relacionados con el Estado de Derecho, los Derechos Humanos y aquellos ejercidos en interés público y a favor de los colectivos más vulnerables. Sin embargo, a comienzos de los años noventa se llevó a cabo una de las principales reformas de las profesiones jurídicas de jueces, fiscales y abogados en Europa y a mediados de los años 90 en los países de la ex Unión Soviética. Estas reformas fueron bastante ambiciosas y consistieron en: reformar la mayoría de las instituciones jurídicas mediante la redacción de nuevos cuerpos legislativos para cumplir con los parámetros del Estado de Derecho y la democracia, proporcionar asistencia técnica y procurar la capacitación institucional. Además, se resaltó la necesidad de educar a las nuevas generaciones de profesionales del Derecho que podrían continuar con el trabajo de reforma jurídica a largo plazo.

Estas reformas provocaron la creciente solicitud de una educación jurídica profesional pero que no implicó una mejora de ésta, debido a la baja calidad de los libros de texto jurídicos y del compromiso de los docentes y académicos, a las escasas facilidades físicas y académicas ofertadas por la facultades de Derecho y a que la metodología de enseñanza estaba basada en la teoría

jurídica clásica con una limitada aplicación práctica de los conocimientos jurídicos, pues las universidades se centraron en enseñar a los alumnos a identificar y acotar los conceptos jurídicos más que en desarrollar las capacidades de análisis y solución de problemas jurídicos.

En base a estas limitaciones, a partir de 1993 se llevaron a cabo varias iniciativas patrocinadas por organizaciones de donantes nacionales e internacionales para formar a jueces, fiscales y abogados en asuntos relacionados con los derechos humanos, democracia y Estado de Derecho. A partir del año 1996, se comenzaron a fomentar apoyos para la implantación y ejecución de cursos universitarios de práctica jurídica, denominadas clínicas jurídicas o legales, donde los estudiantes de Derecho de los últimos años de la carrera serían formados en valores, habilidades prácticas y en la prestación de los servicios jurídicos gratuitos.

De 1997 a 2002 se crearon más de setenta y cinco clínicas jurídicas universitarias en más de veinte países europeos. La mayoría de las clínicas fueron reconocidas por las universidades que las incluyeron como parte de la estructura universitaria, incluso algunas fueron acogidas como parte del plan de estudios, pero siempre sin dejar de prestar asistencia jurídica gratuita a los grupos más vulnerables de la sociedad.

La clínica jurídica por excelencia desarrollada en la región del centro y este de Europa tiene una duración de uno o dos semestres como curso optativo para aquellos estudiantes de Derecho de tercer, cuarto o quinto año. Normalmente, la clínica funciona como una oficina jurídica donde se adquieren habilidades jurídicas, valores formativos y la oportunidad de que los estudiantes trabajen con clientes reales. La mayoría de estos clientes pertenecen a grupos vulnerables como son jubilados y ancianos, mujeres, niños y desempleados.

A pesar de que las clínicas varían unas de otras en función de las necesidades que necesitan cubrir en cada lugar, suelen ofrecer asesoramiento e información jurídica, representación judicial y servicios de resolución de conflictos en materia de familia, trabajo, administrativa, seguridad social e incluso, en algunas ocasiones, materias penales. La especialización de los programas de las clínicas legales depende, en gran medida, del interés práctico y académico y de la especialización del profesor o abogado que realice la labor de supervisión.

Gracias a la expansión por todo el mundo de las clínicas jurídicas, hoy ya no se duda de la existencia de un movimiento clínico global. Las actividades de diversas organizaciones nacionales e internacionales han permitido crear una red global (ENCLE: *European Network for Clinical Legal Education*) en auge integrada por profesores de Derecho y otras personas comprometidas en la construcción y refuerzo de la educación jurídica clínica alrededor del mundo. Los profesionales que participan en las diversas actividades clínicas globales están motivados por su preocupación por la formación jurídica profesional ofrecida, ya que no reviste el alcance social necesario, dejando sin atender el acceso igualitario a servicios jurídicos efectivos.

II.2. Concepto y características de las clínicas jurídicas

El concepto “clínica jurídica” hace referencia a la educación legal dirigida hacia una enseñanza práctica con el objetivo de acercar a los alumnos que cursan estudios jurídicos a la puesta en práctica de los conocimientos teóricos. La peculiaridad de este concepto de clínica jurídica o de clínica legal es el hecho de que no es un término unívoco, pues puede sugerir diversas acepciones dependiendo del contexto en que se aplique. La definición más simple y sencilla sería decir que una clínica jurídica es un método de enseñanza del Derecho basado en casos reales, destinado a que el estudiante se inicie en el mundo profesional a la vez que se somete a la supervisión y tutorización por parte de profesores y especialistas. Esta definición omite que se trata de ofrecer un asesoramiento legal totalmente gratuito, destinado a aquellas personas con escasos recursos económicos. Por ello, es un método de aprendizaje incorporado a algunas Universidades para prestar, además, un servicio a la comunidad, en cumplimiento con las funciones educativa y social encomendadas a las Universidades, que le permite involucrarse en los asuntos jurídicos que afectan a la comunidad a la vez que innova en el método de enseñanza jurídica tradicionalmente aceptado.

A pesar de las diversas experiencias que pueden tener lugar dentro de las clínicas jurídicas, como se verá más adelante, este tipo de educación tan práctica se caracteriza por innovar la forma de estudiar Derecho en las universidades, promoviendo el aprendizaje a través de la experiencia y la responsabilidad que ofrece entrar en contacto con la práctica. Se configuran como centros de enseñanza práctica del Derecho, integrados dentro de las Facultades de Derecho, en los que los alumnos de los últimos cursos aprenden a través de la puesta en práctica de los conocimientos y destrezas adquiridas en clase a lo largo de los cursos del Grado en Derecho, entrando en contacto con experiencias reales, con el único fin de aprender e implicarse con la sociedad.

Con este método de enseñanza los estudiantes se enfrentan a problemas y situaciones reales, como los que viven los abogados y juristas una vez que se incorporan a la vida laboral. Se exige que los alumnos se impliquen con los casos, estudiando la jurisprudencia y la normativa aplicables para dar una solución. Para esta labor, los estudiantes deben interactuar de manera autónoma con otras personas, desconocidas, a las que deben atender, escuchar y tratar de identificar el problema que les plantean con el fin de asesorarlos. Los casos que llegan a los integrantes de las clínicas no son llevados de manera profesional, pues únicamente se intenta dar una primera orientación legal, a partir de la cual la metodología de trabajo a seguir variará en función del tipo de clínica jurídica que se haya establecido. Los estudiantes resuelven los supuestos con la supervisión de docentes e incluso de profesionales del Derecho que colaboren. Con este sistema de enseñanza, el fin perseguido es el acceso de los estudiantes de Derecho a la práctica, de manera que compaginen el estudio teórico con la adquisición de las capacidades y destrezas profesionales necesarias en la práctica.

Por todo lo expuesto hasta aquí, podemos afirmar que las clínicas jurídicas constituyen una actividad de aprendizaje-servicio pues en ellas se aúnan la adquisición de conocimientos junto con la prestación de un servicio a la comunidad. La educación jurídica clínica se caracteriza así por las siguientes notas: la práctica se basa en situaciones reales, estando dirigida al desarrollo de habilidades profesionales; se utilizan medios de enseñanza activa; los alumnos siempre están bajo supervisión y forma parte de la actividad docente universitaria.

II.3. Funciones de la educación jurídica clínica



Fuente: Elaboración propia.

Las clínicas jurídicas van más allá de ser un método novedoso de enseñanza basado en la práctica, porque además prestan un servicio a la comunidad. Por tanto, son un método de enseñanza a través de la práctica con asuntos reales de interés social. Estas dos funciones, la función educativa y la función social, son esenciales para permitir a la Universidad involucrarse en los asuntos jurídicos que afectan a su comunidad, a la vez que le permite innovar en el método de enseñanza. Pero ¿qué suponen estas funciones? La función educativa ya la conocemos, pero más importante es la desconocida función social que ha sido encomendada a las universidades públicas.

La función social cobró gran importancia a raíz de la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior celebrada por la UNESCO el 9 de octubre de 1998 denominada "La educación superior en el siglo XXI: Visión y acción"¹, en la que prevalecieron las tesis "sociales", esto significó que no sólo se aspirara a la calidad académica, sino también que las universidades se comprometieran a usar ese conocimiento creado y a difundirlo. Para ello se solicitó que la universidad se convirtiera en un agente activo en el desarrollo socioeconómico

¹ UNESCO, La Educación superior en el s. XXI, visión y acción: informe final. Tomo I, 1999, pp. 4-5.

y así formar un país basado en el conocimiento. En resumen, la función académica es la que permite formar a los futuros profesionales en cualquier campo, mientras que la función social es la que busca que esos profesionales apliquen los conocimientos adquiridos para el desarrollo y mejor funcionamiento de la sociedad.

Una vez aclaradas ambas funciones, podemos afirmar que la educación clínica es importante como herramienta de transformación de la enseñanza del Derecho en tres aspectos. En primer lugar, como cambio en los métodos de enseñanza que permita avanzar mediante la combinación de la formación con la introducción a la práctica de la profesión. En segundo lugar, como una de las formas por las que se reconoce el papel que desempeña la Universidad “en y para la sociedad”. Es una vía para acortar ese distanciamiento tan criticado de la Universidad con la realidad social. En tercer y último lugar, como una manera de colaborar en el derecho al acceso a la justicia y en la protección de los derechos, pues las clínicas son lugares donde los estudiantes aprenden sobre las necesidades de la comunidad y sobre cómo abordarlas.



En el libro *Lawyering Skills and the Legal Process* se ilustra² lo que ocurre cuando un recién graduado en Derecho sale al mundo real mediante una ilustración en la que el graduado cae por un precipicio. Esta imagen pretende ser un ejemplo visual del cambio existente entre la enseñanza que se imparte en el aula y lo que espera a ese recién graduado al incorporarse a la vida laboral. Esa caída, o cambio, obedece a que la enseñanza tradicional está basada en la adquisición de conocimientos puramente teóricos acompañados de contados casos prácticos, fundamentando la adquisición de estos conocimientos en el estudio de la legislación, jurisprudencia y doctrina de ese momento. De esta forma, se está fomentando una visión estática del Derecho, sin propiciar la valoración crítica ni el papel activo que ese futuro jurista va a desarrollar en el mundo profesional una vez que finalice su etapa académica.

La sociedad actual necesita profesionales que sean algo más que simples graduados con conocimiento puramente teóricos. Se necesitan juristas con conciencia social que sean clave para la defensa y garantía del sistema de derechos y libertades de nuestra sociedad. Son necesarios juristas con una mente abierta, imaginación y creatividad para abordar los nuevos retos y desafíos que están afrontando y afrontarán las sociedades contemporáneas. En la época actual se requiere de juristas con los valores de empatía, solidaridad y con sensibilidad hacia la situación de los más vulnerables; profesionales que pongan el Derecho al servicio de la igualdad de oportunidades y la libertad real y efectiva de todas las personas y colectivos.

² Imagen de autor desconocido extraída de la Revista *Ius et veritas*, nº 45, 2012, p.375.

A. Un laboratorio para el aprendizaje del derecho

El método de formación basado en la clínica jurídica se presenta como la herramienta idónea para formar a juristas cualificados, pues este método promueve la adquisición de habilidades y destrezas, capacidades y competencias generales y específicas que son esenciales para el desarrollo de la profesión jurídica. Entre ellas, podríamos destacar algunas como son: la argumentación, la investigación, la negociación o la toma responsable de decisiones, junto con la realización de entrevistas y el establecimiento de relaciones con el cliente utilizando la correcta la expresión oral, redacción de escritos, etc. Además, este tipo de prácticas potencian la capacidad de reflexión y de crítica de los estudiantes en relación con la legislación vigente y con las actuaciones y modo de trabajo de los diferentes operadores jurídicos. Estas habilidades únicamente se aprenden y desarrollan mediante la práctica, afrontando casos reales que los estudiantes deberán resolver con los conocimientos transmitidos en el aula. Tales destrezas ayudarán a formar juristas profesionales habituados al trabajo en equipo, pues en las clínicas habrá más de un estudiante, lo que permitirá que los alumnos compartan sus diversos puntos de vista para resolver una misma cuestión, ampliando su visión jurídica de los distintos asuntos de la vida cotidiana.

Es importante destacar que, al ser los estudiantes los principales responsables de los resultados del trabajo clínico, se fomenta la autorreflexión sobre su propia actuación y sus consecuencias, aspecto que propicia la adquisición de una deontología profesional, ausente a lo largo del Grado y fundamental a la hora de ejercer profesionalmente. La educación jurídica clínica es la herramienta con la que se puede complementar y desarrollar las características tan necesarias en los juristas que se pretenden formar en las universidades. Incluso en el futuro puede ser un mecanismo de transformación de la institución universitaria tal y como la conocemos hoy.

Las clínicas jurídicas no son simples mecanismos donde los alumnos estudian casos y les pretenden dar solución, sino que son espacios de aprendizaje en los que el estudiante asume la responsabilidad de su aprendizaje mediante su propia reflexión, afrontando los asuntos que van a llegar y ser capaz de interactuar con los interesados. Simultáneamente prestan un servicio, por el que la universidad ejerce su función de responsabilidad social, como abordaremos en el siguiente epígrafe. La implementación de las clínicas legales en las Facultades de Derecho ha evidenciado que son una herramienta idónea para fomentar destrezas profesionales, formándose para su salida al mundo laboral con mayor confianza para afrontar casos reales.

Los objetivos de las clínicas jurídicas, con independencia del modelo por el que se opte, son los siguientes:

- Adquisición de conocimiento teórico por parte del alumno,
- Adquisición de conocimiento práctico y cotidiano del alumno,
- Adquisición de competencias profesionales y trabajo en equipo,
- Educación en valores y responsabilidad social,

- Prestación de servicios jurídicos a personas o grupos de personas que por sus escasos recursos económicos no puedan permitirse acceder a otro tipo de servicios jurídicos.

B. Un servicio a la sociedad: el voluntariado jurídico

Concepción Molina, responsable de la Clínica Jurídica ICADE, manifestaba en la presentación de la misma que “las clínicas jurídicas son espacios de formación para los alumnos que se ponen al servicio de la comunidad”. Por ello, los programas que se integran dentro de las clínicas jurídicas contribuyen de una forma muy positiva a la comunidad, pues se ofrece un servicio jurídico a instituciones o personas que lo necesitan. Es una manera de cubrir una necesidad social existente en nuestra comunidad de forma totalmente altruista por parte de los estudiantes que solicitan colaborar en la clínica.

Además, tal y como manifestó Alberto Alemanno en el año 2016 en un foro de discusión en la Fundación FIDE³, la forma de enseñar el derecho y las diversas profesiones del mundo jurídico están muy distanciados. Continúa afirmando que hay una “mercantilización de la profesión jurídica” y que esta profesión debe ofrecer algo más a sus clientes, siendo la mejor manera de conseguirlo los “*servicios jurídicos no convencionales para clientes no convencionales asesorados por equipos no convencionales*”⁴. Es decir, esta brecha entre la enseñanza y la práctica del Derecho disminuiría ampliando el ejercicio del pro bono, que no es más que un trabajo jurídico voluntario y no remunerado del que nos ocuparemos en profundidad más adelante.

Las clínicas jurídicas fomentan entre los estudiantes y, en general, en la comunidad académica, la responsabilidad social de la abogacía y el valor del servicio a la comunidad de una forma desinteresada. Los alumnos o alumnas que se ofrecen a participar en las clínicas deben tener una gran motivación por adquirir conocimientos, que se complementa con la satisfacción personal que supone ayudar a una persona a resolver los problemas que plantea. De forma similar a cómo se participa en un voluntariado, por ejemplo, en la Cruz Roja, similar colaboración se desarrolla en las clínicas jurídicas, cuya herramienta de trabajo son los conocimientos adquiridos en sus estudios universitarios de Derecho.

Las clínicas jurídicas cumplen con la anteriormente mencionada función social, porque los estudiantes ofrecen sus conocimientos para ayudar a la población de escasos recursos o que está en situación de vulnerabilidad social, acudiendo en busca de asesoramiento legal. Dichas personas o colectivos obtienen un asesoramiento legal gratuito por parte de estudiantes, que les

³ FIDE son las siglas de la Fundación para la investigación sobre el Derecho y la Empresa. Es un proyecto colectivo que nace en el seno de la sociedad civil con el objetivo de ser un punto de encuentro para las empresas, la administración pública y los profesionales independientes. Su organización se estructura en torno a un Patronato, un Consejo Académico y Entidades Colaboradoras.

⁴ <https://aquiescencia.net/2016/02/23/las-clinicas-juridicas-en-la-ensenanza-del-derecho-en-europa/>

permita ir alcanzando la igualdad de oportunidades y su integración en la sociedad para el disfrute de sus derechos.

Se ejerce así la tarea de ‘conciencia social’ que debe realizar la Universidad pública. De esta forma, se puede calificar el trabajo de las clínicas jurídicas como un voluntariado jurídico que desempeñan los alumnos de los últimos cursos. Un ejemplo lo encontramos en el voluntariado jurídico desarrollado en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso en Chile, en la que los alumnos han creado una organización cuya misión es proporcionar asesoría y orientación a todas aquellas personas que no puedan permitirse un abogado por sus propios medios. Se centran, principalmente, en las juntas de vecinos de la Región de Valparaíso, de forma que acuden los sábados a visitarlos para atender sus necesidades y ver de qué forma pueden ayudarles.

II.4. Modelos de clínicas legales

La actividad clínica puede ser muy variada, tanto como lo son las diversas profesiones que conforman el mundo jurídico, pero en todas en ellas hay un elemento común la combinación del aprendizaje doctrinal y la adquisición de habilidades específicas del ejercicio profesional. De esta forma, las clínicas jurídicas tratan multitud de temas como pueden ser la defensa de los derechos humanos o la protección de los consumidores y usuarios. Pero si algo caracteriza el mundo clínico es el interés público, ya sea a través del asesoramiento de personas con pocos recursos, colectivos desfavorecidos o la defensa del medio ambiente.

De acuerdo con la situación actual de los países donde las clínicas jurídicas están más extendidas, puede observarse que éstas responden a dos grandes modelos. En primer lugar, están las “Community-based clinics”, es decir, las clínicas jurídicas que se articulan por medio de entidades extrauniversitarias dotadas de personalidad jurídica, como pueden ser asociaciones, fundaciones, etc., independientes de la universidad. Normalmente actúan como organizaciones no gubernamentales en las que los tutores son abogados ejercientes que supervisan a los estudiantes de una o varias facultades mientras trabajan con sus clientes. El otro modelo de clínica jurídica son las “University-based or “in-house clinics” que consisten en la creación de órganos universitarios. Son clínicas internas o ubicadas en la propia Universidad, donde los docentes de la clínica son profesores de la Facultad que ofrecen asesoramiento a particulares, en cuya labor intervienen los alumnos. A estos estudiantes se les reconocen créditos por su labor en el seno de la clínica.

Siguiendo la tipología establecida en la Guía sobre cómo crear, organizar, gestionar y conducir una clínica jurídica en una Facultad de Derecho, mencionada en la bibliografía, se puede catalogar seis tipos de clínicas jurídicas:

- Los consultorios o asesorías jurídicas: estos servicios, organizados por las Facultades de Derecho, basan su funcionamiento en que los estudiantes, siempre supervisados por profesores y apoyados por abogados, atiendan de forma gratuita las dudas y consultas de cara al

público. Dentro de este tipo, pueden encontrarse programas clínicos que ofrecen servicios especializados por materias, por ejemplo, en materia penitenciaria o de sucesiones.

- Servicios jurídicos comunitarios: este servicio atiende a aquellas personas que se pueden encontrar con dificultades o limitaciones para hacer efectivo el ejercicio de sus derechos. Su función es la de informar y orientar a la ciudadanía sobre qué hacer, a dónde ir y qué procedimientos son necesarios activar para afrontar los problemas planteados.
- Servicios clínicos de representación: mediante este servicio, los estudiantes, bajo supervisión, asumen labores de representación de clientes reales con reclamaciones concretas, ya sea de orden administrativo o de carácter judicial.
- Street Law o clínicas de divulgación jurídica: en este caso, los estudiantes se convierten en educadores o divulgadores jurídicos en relación con un colectivo determinado y en una materia concreta. Consisten en charlas o coloquios sobre temas concretos que los estudiantes que integran las clínicas jurídicas dan a diversos colectivos de la sociedad de forma pública y gratuita.
- Clínicas de resolución alternativa de conflictos: en estos programas clínicos los estudiantes desarrollan labores de mediación, conciliación, intermediación y arbitraje. Estas clínicas están enfocadas para aquellas materias en las que estos métodos de resolución de conflictos están tomando cada vez más protagonismo.
- Abogacía de interés público: esta modalidad se refiere a aquellos casos en los que las clínicas jurídicas deciden intervenir en determinados procesos jurídicos para potenciar la formación del alumno, debido al interés que el asunto pueda tener en la sociedad, como podrían ser procesos relacionados con los derechos humanos. Dentro de esta categoría podríamos incluir la abogacía de alto impacto o estratégica, que es la encargada de intervenir en procesos relacionados con la protección de los derechos humanos y de grupos vulnerables con trascendencia social. Este es el caso de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá que ha colaborado en un caso de litigio estratégico sobre la denegación de la tarjeta sanitaria a inmigrantes o la Clínica Jurídica de la Universidad de Valencia que ha trabajado en casos de litigio estratégico sobre segregación étnica, apología del terrorismo y libertad de expresión.

Estas tipologías son sólo posibilidades, pudiéndose optar por muy diversas opciones. Es factible crear clínicas jurídicas atendiendo a las materias que se pretenda tratar, por ejemplo, una clínica jurídica civil dentro de la cual haya secciones que se encarguen de temas particulares como obligaciones y contratos, derecho de familia, derecho de sucesiones, etc. Además, también puede impulsarse clínicas jurídicas vinculadas a las prácticas externas curriculares o clínicas asociadas a la memoria o trabajo de fin de Grado o trabajos de fin de Máster.

III. LA ENSEÑANZA JURÍDICA CLÍNICA EN LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS

La enseñanza clínica en los estudios universitarios de Derecho plantea la cuestión de su fundamento. Su principal justificación es que son una opción para el aprendizaje práctico del Derecho y para concienciar de la importancia del Derecho como herramienta de transformación social. Contribuyen a formar a juristas con una visión integral del Derecho, críticos y con una perspectiva social para ser éticamente responsables. La metodología clínica se basa en el “hacer” de los estudiantes que entran en contacto con la realidad, ya sean con problemas del día a día.

Las clínicas también acaban teniendo un importante impacto social, porque la universidad se beneficia de este contacto con la sociedad, contribuyendo a concienciar sobre los problemas sociales actuales, pero también la sociedad civil se beneficia de este contacto, visualizando la importancia de la institución universitaria en el desarrollo de un país. Por todo esto, la educación clínica se concibe como un factor de cambio social.

III. 1. Clínicas jurídicas en España

A partir del año 2003 surgen las primeras clínicas jurídicas en nuestro país con el fin de introducir metodologías activas de enseñanza con mayor vinculación a la realidad, iniciativas que estaban motivadas por el cambio que supuso el Espacio Europeo de Educación Superior. En España, en estos momentos de cambios en la formación jurídica (nueva regulación de acceso a la abogacía, nuevos programas de máster de abogacía, Proceso de Bolonia, etc.), las clínicas jurídicas se perciben como un instrumento idóneo para la innovación en los métodos de enseñanza del Derecho y para adaptarse a estos cambios. Ya en el año 2012 se hace patente el interés de los profesionales en que se lleven a cabo actividades pro bono y vincularlas a las clínicas jurídicas que comienzan a funcionar, propiciado por el afianzamiento del movimiento clínico. Este paso se dio debido a la consolidación en España del mediante los encuentros nacionales e internacionales sobre las clínicas jurídicas y por la implementación en el año académico 2010-2011 de los nuevos planes de estudios que exigían la inclusión de metodologías activas de acuerdo con los presupuestos del Plan Bolonia.

El Espacio Europeo de Educación superior (en adelante, EEES o Proceso Bolonia), donde los estudios de Grado están orientados a los resultados del aprendizaje, en lugar del contenido como es tradicional, coherente con el modelo de enseñanza clínico, pues este es un sistema participativo donde se promueve el trabajo en equipo. En consonancia el EEES, debemos enmarcar la importancia de las clínicas jurídicas dentro de nuestra Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, pues en su primer artículo establece que *“la Universidad realiza el servicio público de la educación superior mediante la*

investigación, la docencia y el estudio". Por ello, este puede ser el punto de partida para dirigir el aprendizaje hacia la vocación de servicio público⁵.

El mayor impulso del movimiento clínico en España tuvo lugar en Valencia en el 2011 con la celebración de un doble congreso: el sexto Congreso Mundial de Global Alliance for justice Education y el noveno Congreso International Journal of Legal Education (IJCLE). Entre los encuentros nacionales de clínicas que se han ido sucediendo a lo largo de los años, cabe citar en 2007 el "Seminari Internacional sobre Clinical Legal Education, Estudis de Dret Ambiental- Grup d'innovació docente- de la Facultat de Ciències Jurídiques, Universitat Rovira i Virgili de Tarragona; el Workshop "Experiencias de clínica jurídica en las Universidades españolas", de la Facultat de Dret, Universitat de València en septiembre de 2010; el III Encuentro de Clínicas jurídicas de las Universidades españolas celebrado en el marco del Quinto Congreso Nacional de docencia del Derecho en septiembre de 2013 o el IV Encuentro organizado por la Universidad Carlos III en el Colegio de Abogados de Madrid, que tuvo lugar en septiembre de 2014; en el año 2016 en la Universitat de València, y en 2017 en la Universidad de Alcalá. Entre las propuestas planteadas en estas reuniones se encontraba la creación de una red de clínicas jurídicas para proporcionar la visibilidad y el reconocimiento por parte de las instituciones públicas, establecer criterios y estándares que identifiquen la educación jurídica clínica, propiciar el intercambio de experiencias y la colaboración entre clínicas, etc.

Desde la perspectiva europea también se ha facilitado la cohesión y la relación entre las clínicas. Así, la participación en encuentros europeos ha fomentado que se conozcan nuevas metodologías y experiencias, a la vez que se ha creado, en el año 2012 pero entrando en funcionamiento en octubre de 2013, la Red Europea de Educación Jurídica Clínica (European Network for Clinical Legal Education- ENCLE). Esta red tiene como objetivo promover la justicia y mejorar la calidad de la educación jurídica a través de las clínicas jurídicas. Algunas de las acciones llevadas a cabo por ENCLE son, entre otras, la creación de plataformas que permitan el intercambio de información y proyectos de investigación entre las diversas clínicas jurídicas europeas que son miembros de esta red o la organización de conferencias y talleres de trabajo.

Todas estas actividades son manifestación del desarrollo de un movimiento de clínicas jurídicas, que se está consolidando y permitirá ser el elemento que transforme la metodología docente, facilitando el papel que la Universidad ha de jugar en la sociedad.

III. 2. La Red Española de Clínicas Jurídicas

Debemos comenzar recordando que las clínicas jurídicas son proyectos universitarios, es decir, surgen y dependen de las estructuras universitarias. Por ello, la universidad debe ser el primer enclave donde debe darse difusión a la clínica que se crea. Dentro de la universidad, el éxito de la clínica dependerá,

⁵ La Clínica Jurídica Villanueva: Función Social y Pedagógica del aprendizaje del Derecho, p. 8 – 9.

en parte, de la capacidad que tenga para recabar el apoyo necesario en el seno de la institución. El problema radica en que una clínica jurídica es un proyecto complejo y arriesgado que forma parte de la universidad, por lo que es difícil conseguir que arranque. Para ello, es importante empezar con proyectos pequeños, que permitan obtener la confianza tanto de la comunidad universitaria como de sus círculos más cercanos, como pueden ser asociaciones o entidades colaboradoras habituales, para después continuar con proyectos más ambiciosos.

Las dificultades que deben ir sorteando las clínicas son comunes por lo que, en aras de aunar esfuerzos para diseñar estrategias de actuación, intercambiar experiencias y afrontar problemas comunes surge la propuesta de crear una red conjunta de clínicas jurídicas españolas. La creación de la Red Española de Clínicas Jurídicas se articuló a partir de los encuentros que tuvieron lugar en la Universitat Rovira i Virgili en 2007, en la Universitat de València en 2010 y 2013, en la Universidad Carlos III de Madrid en 2014, en Universitat de València en 2016 y, por último, en la Universidad de Alcalá en 2017. Las funciones que asume son difundir la enseñanza legal clínica, promoviendo un cambio en la manera en que se enseña y aprende Derecho, y fomentando la función social de los estudios jurídicos, al involucrar a estudiantes y docentes en una actividad de la que se beneficia la comunidad.

La actividad que realizan las clínicas que componen la Red Española de Clínicas Jurídicas se enmarca en el Aprendizaje-Servicio, pues permite unir la adquisición de conocimientos y competencias con la prestación de un servicio a la comunidad, como es facilitar el acceso a la justicia. En la web de la Red Española de Clínicas Jurídicas se encuentra el listado completo de las universidades que han puesto en marcha su propia clínica jurídica, así como un repositorio con documentación de interés para comprender el mecanismo de las clínicas jurídicas y las últimas novedades sobre las mismas y los encuentros que se realizan anualmente. Actualmente, esta red está formada por un total de veintiséis clínicas jurídicas⁶:

- Clínica Jurídica de Acción Social, Universidad de Salamanca
- Clínica Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo
- Clínica Jurídica de la Universidad Católica de Valencia
- Clínica Jurídica de la Universidad de Alicante
- Clínica Jurídica de la Universidad de Cádiz
- Clínica Jurídica de la Universidad de las Islas Baleares
- Clínica Jurídica de la Universidad de Navarra
- Clínica Jurídica de la Universidad de Valladolid
- Clínica Jurídica de la Universidad Europea de Madrid
- Clínica Jurídica de la Universidad Internacional de La Rioja
- Clínica Jurídica de la Universidad Loyola Andalucía
- Clínica Jurídica de la Universidad Miguel Hernández
- Clínica Jurídica de la Universidad Nebrija
- Clínica Jurídica de la Universidad Pontificia Comillas – ICADE

⁶ La relación de las mismas puede consultarse en su web: <http://clnicas-juridicas.blogspot.com/p/quienes-somos.html>

- Clínica Jurídica de la Universitat Rovira i Virgili
- Clínica Jurídica del Instituto de Derechos Humanos 'Bartolomé de las Casas', Universidad Carlos III de Madrid
- Clínica Jurídica del Máster en Protección Jurídica de Personas y Grupos Vulnerables (Universidad de Oviedo)
- Clínica Jurídica en Diversidad Funcional (Clínica Jurídica Dret al dret), Universidad de Barcelona
- Clínica Jurídica Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Carlos III de Madrid
- Clínica Jurídica Loiola (Universidad de Deusto)
- Clínica Jurídica para la Justicia Social de la Universidad del País Vasco
- Clínica Jurídica per la justícia social, Universitat de València
- Clínica Jurídica del Centro Universitario Villanueva (Madrid)
- Clínica Jurídica del Instituto de Empresa
- Clínica Jurídica de la Universidad Jaume I
- Clínica Legal de la Cátedra 'Discapacidad, Enfermedad Crónica y Accesibilidad a los Derechos', Universidad de Alcalá.

A modo ilustrativo, se mencionará las líneas de actuación de algunas de estas clínicas jurídicas.

La Clínica Jurídica ICADE tiene un programa de Street Law, que persigue empoderar a las personas y colectivos más desfavorecidos, formándoles para que sean conscientes de sus derechos y ayudarles a resolver las dudas que puedan tener sobre los mismos. Ofrece charlas de temas sociojurídicos, orientadas a las necesidades de los colectivos y personas en situación de riesgo o exclusión con un lenguaje sencillo y riguroso al alcance de todos. Estas charlas se solicitan mediante correo electrónico.

La Clínica Jurídica de la Universidad de la Rioja se organiza en cinco cursos diferentes y colabora con la Red de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social que agrupa 59 ONG's y entidades sociales. Los cursos versan sobre lo siguiente:

- Análisis jurídicos: es el nivel más avanzado de todos los cursos de la clínica, encargándose de realizar investigaciones e informes jurídicos sobre cuestiones jurídicas complejas como puede ser el diagnóstico de la situación de un derecho o propuestas para modificar normas o procedimientos.
- Microconsultas: su labor se centra en cuestiones jurídicas más sencillas. El trabajo de los estudiantes se centra en localizar la norma o normas apropiadas para cada caso y presentar una solución a la cuestión jurídica planteada, para posteriormente comunicársela a los interesados.
- Street Law: Este término hace referencia a las acciones formativas con contenido jurídico dirigidas y adaptadas a los colectivos o entidades sociales con los que trabajan sobre un tema determinado o sobre cuestiones jurídicas de su interés o que consideren necesarias para el ejercicio efectivo de sus derechos o para desarrollar su labor de manera óptima. En este caso, los alumnos son los encargados de diseñar y

adaptar los programas de formación a los grupos a los que se dirigen para que los contenidos sean fácilmente comprensibles.

La Clínica Jurídica de la Universidad de Salamanca tiene fijadas cuatro líneas de actuación:

- Consumo responsable y protección jurídica de consumidores: con este proyecto se pretende que los estudiantes puedan detectar abusos colectivos y sectoriales de los derechos de los consumidores y proporcionar respuestas jurídicas, sociales y comunicativas, conocer las vías de participación, reclamación y acceso a la justicia de los consumidores mediante casos colectivos reales, comprender las implicaciones sociales y medioambientales de la sociedad de consumo y reflexionar sobre la necesidad de un consumo crítico y responsable y, por último que tomen conciencia del fenómeno de la globalización económica para así abordar de forma crítica la actividad de las empresas transnacionales.
- Memoria histórica: su objetivo es doble, por un lado, formar a los estudiantes para que participen en el manejo de los instrumentos jurídicos que permiten tramitar las solicitudes recibidas en la Asociación Memoria y Justicia y, por otro, contribuir a través de la Universidad a la educación, sensibilización, divulgación y compromiso con los derechos humanos y la reparación de la Memoria Histórica en España. El objetivo es que los alumnos se acerquen y entiendan el problema escuchando y orientando a las víctimas, así como que se familiaricen con los procedimientos de solicitud de ayuda a la Administración y de los que la ley disponga para la reparación a las víctimas.
- Menores y el uso de internet: se encarga de la divulgación, información y asistencia a padres, menores y centros educativos sobre los problemas relacionados con el uso de internet y de las redes sociales por parte de los menores de edad.
- Mujer y discapacidad: su finalidad es realizar un acercamiento a la situación que viven las mujeres con discapacidad, con especial atención a la discapacidad intelectual, y valorar en qué niveles se han producido cambios y se están articulando medidas diversas en los espacios de intervención, tras la ratificación por España en el 2008 de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad.

La Clínica Jurídica de la Universidad de Navarra desarrolla tres ámbitos relacionados entre sí:

- AJÁ (asesoramiento jurídico de alumnos): se trata de un servicio de orientación jurídico ofrecido para todos los miembros de la comunidad universitaria, no sólo alumnos sino también para profesores, PAS, etc.
- Escuela de Derecho en la calle o Street Law, principalmente para asociaciones de personas con discapacidad, centros educativos y para colectivos de inmigrantes.
- Investigación jurídica aplicada, en los que se trabaja e investiga sobre cuestiones jurídicas concretas.

La Clínica Jurídica de la Universidad Carlos III de Madrid ha desarrollado tres áreas de actuación:

- Clínica de Derechos Humanos: dentro de ésta se centran en la materia de igualdad y no discriminación de las personas con VIH y también en relación con los derechos de las personas con discapacidad. Además, tienen acciones de Street Law en esta materia en los que los estudiantes preparan contenido relacionado con los derechos humanos para posteriormente explicarlo a personas que no tienen formación jurídica alguna.
- Clínica Jurídica de Desarrollo Local: en este ámbito, los alumnos atienden a las personas que les remiten los Servicios Sociales de las entidades locales que colaboran con la clínica, y los orientan sobre su situación jurídica, las vías de actuación que tienen ante la administración para defender sus derechos e intereses y demás cuestiones jurídicas que no precisan de la intervención de un abogado.
- Clínica de Emprendimiento: su objetivo es proporcionar a los emprendedores con pocos recursos la información jurídica básica para la puesta en marcha de sus proyectos, así como que conozcan los primeros pasos que debe dar una empresa socialmente responsable.

Esta relación evidencia que cada universidad ha desarrollado su clínica jurídica de forma diferente, pero la razón de ser que justifica su existencia es la misma: asesorar jurídicamente a las personas que así lo necesiten. La diferencia radica en las diferentes especializaciones por las que se ha optado atendiendo a circunstancias diversas, como la especialidad de los docentes que colaboran en la clínica o las necesidades existentes en su entorno.

III. 3. El trabajo “pro bono”

Muy vinculado a las clínicas jurídicas está lo que se conoce como “trabajo pro bono”, consistente en la prestación de servicios jurídicos por abogados de manera voluntaria y sin ánimo de lucro, destinada a personas necesitadas, menos privilegiadas, en situación de marginalidad o vulnerabilidad social y a las entidades sociales sin fines lucrativos. Esta expresión es un latinismo, abreviación de “pro bono público” que significa “por el bien público”, “por el bien común” o “en beneficio de la sociedad”. Por tanto, quien realiza trabajo pro bono está contribuyendo al bien de todos o de aquellos más necesitados.

No debe confundirse el pro bono con la asistencia jurídica gratuita ni con el voluntariado jurídico. La asistencia jurídica gratuita es prestada por los Colegios de Abogados a través del turno de oficio. En este caso, los profesionales que se hacen cargo de este trabajo reciben una remuneración por el trabajo que realizan y este servicio se destina tanto para entidades no lucrativas como para particulares con escasos medios económicos. Por el contrario, en el voluntariado, éste no tiene por qué realizarse en horario laboral ni tiene por qué estar relacionado con la actividad laboral, mientras que el pro bono se realiza en horario laboral pues los abogados deben considerar el asunto como un caso más.

Dentro del sector de la abogacía, el trabajo pro bono puede ser considerado como el alma de la Responsabilidad Social de la Abogacía (RSA). Así, en España entendemos el trabajo pro bono de abogados como los servicios jurídicos gratuitos prestados de forma voluntaria y sin ánimo de lucro en beneficio de colectivos vulnerables, personas necesitadas o por el bien común de la sociedad. De hecho, si retrocedemos a la época de la Roma Clásica, comprobaríamos que los abogados ya desempeñaban un papel fundamental en la sociedad por el que se ocupaban de promover la tutela judicial efectiva y de auxiliar al necesitado. Unos siglos más tarde, a lo largo de la Edad Media en Europa, la concepción sobre el trabajo gratuito de los abogados a favor de los pobres se expandió geográficamente unida a la concepción católica del mundo, de forma que hoy en día, ésta es la concepción vigente en la sociedad y que provoca la reacción a favor del pro bono por parte de bufetes, abogados individuales y profesionales del Derecho que trabajan para grandes empresas. Con esto se confirma que, para los abogados, el trabajo pro bono no es novedoso, sino que siempre ha sido una oportunidad para que éstos continúen contribuyendo al progreso social.

Relacionado con los trabajos pro bono encontramos el sistema de asistencia jurídica gratuita que surgió a finales del siglo XV cuando, en 1495, el rey inglés Enrique VII promulgó una normativa mediante la cual se requería a los jueces a asignar un abogado que ejercía de consejero para los pobres cuando éstos solicitaran justicia⁷. Este procedimiento se denominó *informa pauperis*. A partir de ese momento el sistema de asistencia jurídica gratuita se ha ido mejorando e integrando en la labor que realizan los abogados. El problema de la asistencia jurídica gratuita es que, a pesar de ser un gran adelanto en las sociedades desarrolladas, no alcanza a todas las situaciones ni a todas las personas que precisan, y es ahí cuando entra en funcionamiento el trabajo pro bono como complemento a la asistencia jurídica gratuita.

Es importante matizar que el pro bono es una actividad no remunerada, pero ello no implica que no suponga algún coste para el beneficiario de dicha actividad. Esta gratuidad del pro bono se refiere a la actividad concreta profesional, pero no necesariamente a los medios materiales que esta actividad pueda necesitar, ni a las labores organizativas que la acompañan. Esos otros gastos del pro bono pueden repercutir en el cliente, pero no por ello desvirtúa esta figura, pues es destacable como estos otros gastos pueden verse disminuidos o incluso desaparecer debido a la intervención de entidades colaboradoras con el abogado o con el despacho.

El término pro bono también se utiliza para designar la intervención que realizan los abogados en el “tercer sector”, con este término⁸ se denomina a aquellas entidades sin ánimo de lucro que organizan e integran la sociedad civil

⁷ Bloch. S. F., Noone. MA., año desconocido. Los Orígenes de la Educación Clínica como Asistencia Jurídica Gratuita. En Bloch. F.S., *El Movimiento Global de Clínicas Jurídicas: formando juristas en la justicia social*, pp. 243 – 244. Tirant lo Blanch, 2013.

⁸ Término que definen Barranco Avilés, M.C., DE Asís Roig, R., Iglesias Garzón, A. (2014) en su *Estudio sobre el pro bono en la Comunidad de Madrid*, Madrid: Ilustre Colegios de Abogados de Madrid, pp. 57 – 58.

para la defensa y promoción de los derechos humanos, asistencia e inclusión social, entre otros fines. El profesional interviene para litigar, realizar la representación ante los tribunales, orientar jurídicamente a un colectivo, etc. Se trata de una práctica muy poco extendida en España, a diferencia de otros países en los que se está llevando a cabo, como por ejemplo en Estados Unidos, Irlanda, Hungría, Rusia, Sudáfrica, Brasil, India, China, Alemania, Reino Unido, etc.

Dentro de los trabajos pro bono ha de diferenciarse varios tipos como son la orientación, el asesoramiento y la defensa, la participación en actividades por el interés general y la formación jurídica, lo que se justifica en la diversidad de temas jurídicos que son susceptibles del trabajo pro bono. El profesional del Derecho, en virtud de su experiencia o conocimientos, tenderá a trabajar en un área u otra:

- a) Orientación: supone la mayor parte del pro bono, pues engloba la resolución de dudas puntuales. Son cuestiones de diverso orden que, una vez resueltas, orientan al interesado sobre los pasos que debe seguir para solucionar la cuestión que le ocupa o para hacer valer sus derechos.
- b) Asesoramiento y defensa: se refiere a la dirección jurídica y representación legal para la resolución de las cuestiones legales de esa persona o entidad social.
- c) Participación en actividades por el interés general: este ámbito es amplio. Por un lado, incluye aquellas actividades destinadas a la mejora del sistema legal como, por ejemplo, la elaboración de informes jurídicos o la redacción de recomendaciones sobre disposiciones legales vigentes. Por otro lado, están los denominados “litigios estratégicos” o “litigios de Derecho público”, en los que a partir de la defensa de un caso concreto se busca trascender el interés particular para reformar algún aspecto del Derecho que afecta a un gran número de personas.
- d) Formación jurídica: está dirigida al personal de las entidades sociales con relación a sus propias necesidades, a colectivos específicos e incluso a otros abogados que presten o vayan a prestar servicios gratuitos. El objetivo principal de esta formación es educar para prevenir conflictos y para formar a los colectivos para el correcto ejercicio de sus deberes y defensa de sus derechos.

Los profesionales que realizan trabajos pro bono lo hacen desde el convencimiento de que esos trabajos forman parte de la responsabilidad social de la abogacía y porque entienden que su función como abogado responde a demandas éticas y sociales. Además, es posible incluir en el pro bono otro tipo de trabajo como la formación jurídica siempre que se lleve a cabo de forma voluntaria y gratuita, con la debida profesionalidad y concebida como una actividad formativa complementaria a la docencia universitaria.

El espíritu que subyace en el trabajo pro bono es el mismo que el existente en las clínicas jurídicas, de ahí que se haya tendido a una colaboración en aquellos lugares en los que coexisten. La colaboración de los abogados en las clínicas jurídicas podría considerarse como una práctica de pro bono. Hay bastantes ejemplos en otros sistemas jurídicos en los que los abogados

participan en las clínicas, de forma que las clínicas se integran también dentro de despachos profesionales, como por ejemplo en las clínicas jurídicas de Estados Unidos, Reino Unido, Bulgaria, Bosnia y Herzegovina o Polonia entre otros. Así, tanto estudiantes, abogados, docentes como entidades sin ánimo de lucro pueden trabajar coordinadamente para ofrecer servicios jurídicos a la población. Con esta integración se fomenta la cultura jurídica del pro bono entre los estudiantes, lo que les facilita la toma de conciencia sobre la responsabilidad social de los abogados y, en general, de los juristas.

La acción conjunta entre la práctica del pro bono y la educación jurídica clínica puede contribuir a mejorar la asistencia jurídica ofrecida a los grupos en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, no todo es positivo en el ámbito del trabajo pro bono, al ser objeto de múltiples críticas dentro del sector legal cuando se insinúa que los trabajos pro bono incurrir en competencia desleal. Crítica que es desmontada al comprobar que parte de la población no puede acceder al mercado de servicios jurídicos debido a las circunstancias que les rodea. Por ello resulta necesario destacar la desigualdad y los desequilibrios que existen en la práctica dentro del mercado de servicios jurídicos y en el acceso a los mismos, tal como se expone en uno de los estudios sobre el trabajo pro bono realizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid:

“Un exceso de abogados especializados en determinadas materias más rentables en términos económicos puede dejar desatendidas otras causas menos lucrativas o determinadas regiones geográficas. La oferta del mercado es, por tanto, desigual. Además, deben tenerse en cuenta las posibles barreras culturales que pueden suponer la ignorancia por parte de los abogados de las circunstancias de alguna minoría o grupo que podría quedar sin protección alguna pretensión justificada al ser sistemáticamente rechazada por los abogados. Y los elementos del sistema judicial que priman el acceso a la justicia de determinados sectores de la población en detrimento de otros. Más allá de la oferta inicial de servicios jurídicos (en términos de mercado) y de las prestaciones sociales por parte del Estado hay lagunas por cubrir en lo que respecta al acceso a la justicia (a veces mercado inaccesible, prestaciones no cubren necesidades)”⁹.

En este fragmento se pone de relieve que los servicios que son prestados en el trabajo pro bono y, en su defecto, por las clínicas jurídicas permite paliar las dificultades que ciertos sectores de la población tienen para acceder a servicios jurídicos. De ahí que la colaboración entre los servicios pro bono y las clínicas jurídicas pueda contribuir con toda seguridad a disipar posibles sospechas de competencia desleal, así como a ofrecer un servicio más eficaz.

III. 4. La colaboración con los Colegios de Abogados

La orientación jurídica que se lleva a cabo en las clínicas jurídicas es uno de los campos en los que la colaboración entre Colegio de Abogados y Universidades es más necesaria pues ambas instituciones entran en contacto

⁹ Blázquez Martín. D., Cuenca Gómez. P., Iglesias Garzón. A. (2014). “Guía sobre cómo crear, organizar y conducir una Clínica Jurídica en una Facultad de Derecho”, Madrid: Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, pp. 50 – 51.

con el denominado tercer sector. En nuestra sociedad, son muchas las personas que precisan orientación jurídica, por ello, la colaboración entre instituciones con compromiso social es fundamental para crear una generación de juristas con conciencia sobre la responsabilidad social de su profesión.

El movimiento de las clínicas jurídicas es recibido con recelo porque se percibe como un modelo de asistencia jurídica gratuita que amenaza con anular el derecho prestacional que el Estado garantiza constitucionalmente en el art. 119 CE. El art. 119 la Constitución Española reconoce el derecho a la gratuidad de la justicia en los casos y forma determinados por el legislador. Se trata de un derecho prestacional y de configuración legal cuyo contenido y condiciones concretas para su ejercicio corresponde delimitar al legislador atendiendo a los intereses públicos y privados implicados y las condiciones presupuestarias de cada momento. Así, el legislador podrá atribuir el beneficio de justicia gratuita a quienes reúnan las características y requisitos que considere relevantes, pudiendo modular la gratuidad de éstos en función del orden jurisdiccional afectado o incluso del tipo concreto de proceso y, siempre atendiendo a los recursos económicos de los que pueda disponer en cada momento el interesado. Este precepto constitucional aparece desarrollado en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita.

Es evidente que se trata de un buen mecanismo, pero es posible que puedan quedar vacíos por cubrir, pues en general se excluyen a aquellas personas que por razones culturales ignoran que tienen estas vías jurisdiccionales para cubrir sus necesidades, o que personas que superan por poca cantidad los umbrales previstos para beneficiarse de esta justicia gratuita viven una situación que les impide acceder al mercado de servicios jurídicos con normalidad, por tanto, se encuentran indefensos y este precepto constitucional les resulta inútil. Por ello, a pesar de las prestaciones ofrecidas por parte del Estado, las clínicas jurídicas buscan cubrir estas posibles lagunas. En consecuencia, la educación clínica es complementaria al sistema de asistencia jurídica gratuita, que no supondría su supresión, sino, por el contrario, lo potenciaría. Por ello, es necesario promover la colaboración de las clínicas jurídicas con las diversas organizaciones profesionales, entre ellas, los Colegios de Abogados, para que a través del trabajo clínico se puedan apoyar los servicios de asistencia y orientación jurídica que prestan, contribuyendo a su mejora y ampliación.

En un intento de conciliar intereses y articular una fructífera colaboración entre los Colegios de Abogados con las diversas clínicas jurídicas que se encuentran en la geografía española se ha elaborado la propuesta de “Convenio Marco de colaboración entre el Consejo General de la Abogacía y la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas en representación de las Clínicas Jurídicas de las Universidades Españolas”, incorporado como anexo de este trabajo. Este convenio entre el Consejo General de la Abogacía Española (en adelante, CGAE¹⁰) y la Conferencia de Rectores de las Universidades

¹⁰ CGAE es el órgano representativo, coordinador y ejecutivo de los 83 colegios de Abogados de España. Entre sus misiones fundamentales está la ordenación del ejercicio profesional de los abogados, velar por el prestigio de la profesión, exigir a los Colegios de Abogados y a sus miembros el cumplimiento de los deberes profesionales y deontológicos y trabajar para

Españolas (en adelante, CRUE¹¹) fue aprobado por la Red Española de Clínicas Jurídicas el 25 de octubre de 2018.

El convenio procura conciliar los intereses de ambos colectivos con el fin de establecer un convenio marco de colaboración para sentar las bases de las relaciones que puedan tener lugar entre los Colegios de Abogados y las clínicas jurídicas existentes en las universidades españolas. El objeto del convenio no es otro que el de sentar las bases de las relaciones que puedan surgir entre ambas instituciones para que los estudiantes de Derecho, partícipes en las clínicas jurídicas, estén en todo momento tutelados por profesionales de la abogacía que se presten voluntariamente a ello y supervisados por docentes, con la finalidad de ofrecer una mejor formación práctica a dichos estudiantes. Se salvaguarda los supuestos que son amparados por la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, para los que se producirá la inmediata remisión.

Es importante resaltar que este convenio no es ni excluyente ni exclusivo de otras opciones que en materia de pro bono puedan firmar el CGAE o las CCJJ de las Universidades Españolas. Como compromisos del CRUE Universidades Españolas, las CCJJ de las Universidades españolas propondrán a los Colegios de Abogados integrados en el CGAE casos que sean de interés comunitario, que podrán ser objeto de actividad formativa, seleccionarán al personal que supervisará la actividad formativa de los estudiantes y velarán porque las actividades se desarrollen correctamente.

Serán las clínicas jurídicas las encargadas de seleccionar al personal docente que supervisará las actividades formativas que se desarrollen y a los estudiantes partícipes en ellas, comunicándoselo a los Colegios de Abogados con el que colabore para llevar a cabo una correcta planificación.

En cuanto a los compromisos del CGAE, se establece que los Colegios de Abogados a través de sus centros de Responsabilidad Social, se comprometen a procurar profesionales de la abogacía voluntarios que reúnan los requisitos de idoneidad exigidos para la causa y a proponer casos pro bono a las CCJJ cuando así lo permitan las características del mismo.

La decisión del nombramiento o designación de profesionales voluntarios corresponde exclusivamente al Colegio de Abogados, pero sin que éste asuma responsabilidad alguna por la actuación profesional de los profesionales voluntarios ni de la diligencia o solvencia profesional de los abogados que desempeñen actividad pro bono. Por tanto, en ningún caso el Colegio de Abogados responderá del contenido y calidad de los servicios jurídicos prestados por los profesionales voluntarios.

alcanzar una justicia más ágil, moderna y eficaz, y también comprometida socialmente a través del ejercicio pro bono.

¹¹ CRUE Universidades Españolas es una asociación sin ánimo de lucro de ámbito nacional, constituida en el año 1994 e inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones integrada por Universidades públicas y privadas españolas. Esta asociación promueve la reflexión sobre las finalidades y problemas universitarios, orientando sus planteamientos con criterios que van más allá de los intereses de sectores o grupos particulares

Ambas partes, CRUE y CGAE, actuarán en todo momento de acuerdo a los principios de buena fe y de confianza legítima. Es importante resaltar la gratuidad de todas las actividades que recaigan bajo este marco de colaboración, pues se realizarán a título gratuito. Ambas partes declaran en el convenio que no se crea relación de dependencia ni vínculo laboral, ni arrendamiento de servicios civiles.

En caso de colaboración de las CCJJ con proyectos de entidades sin ánimo de lucro en los que se prevean servicios, siempre pro bono, el Colegio de Abogados correspondiente, la Universidad a la que esté adscrita la Clínica Jurídica y la entidad colaboradora, fijarán las condiciones de esta colaboración mediante la creación de un convenio entre todas las partes o un protocolo de actuación.

En las cláusulas IX, X y XI, se establecen el régimen de confidencialidad, protección de datos y publicidad respectivamente. Así, se contempla el compromiso expreso de las partes a no difundir, ni durante la vigencia del contrato ni una vez finalizado, a no difundir, transmitir o revelar la información a la que tengan acceso a raíz del desempeño de las actividades. Por ello, todos los documentos, informes y cualesquiera otras notas elaboradas durante las actividades, serán absolutamente confidenciales, obligando a los estudiantes que participen en el proyecto a guardar la más absoluta confidencialidad. Junto con ello, las partes se comprometen a tratar los datos personales de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, y en la normativa aplicable a la materia.

En lo que a publicidad se refiere, las actividades objeto del convenio que se basan en la función social de la abogacía y el ejercicio del pro bono, no tendrán fines comerciales directos ni promocionales, de esta forma, la promoción de esta colaboración debe ceñirse únicamente a exponer sucintamente sus actuaciones para que los posibles beneficiarios conozcan la existencia de los proyectos y que así puedan acogerse a ellos.

IV. LA CLÍNICA JURÍDICA DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ COMO OFICINA DE ASESORAMIENTO.

La iniciativa para la creación de una clínica jurídica en la Universidad de Cádiz parte del actual equipo decanal, siendo responsable del proyecto la Vicedecana de Ordenación Académica, la Prof.^a Emilia Girón Reguera. La creación y la organización de una clínica jurídica en los estudios de Derecho fue posible por la concesión de dos proyectos para de actuaciones Avaladas para la mejora docente en el curso 2017/2018 y en el curso 2018/2019.

En el curso 2017/2018 se concedió la actuación avalada destinada a la “Creación y organización de una clínica jurídica en los estudios de Derecho”, dirigida a materializar un proyecto del equipo decanal de la Facultad de Derecho. La creación de una clínica jurídica en la Universidad de Cádiz tenía como objetivo:

1. Contribuir a que los Trabajos de Fin de Grado o de Máster consistieran en la emisión de dictámenes e informes sobre casos reales.
2. Concienciar a los estudiantes de Derecho de la relevancia social de la profesión.
3. Ser un destino para la realización de las prácticas del Grado en Derecho en la clínica,
4. Integrar la clínica jurídica de la UCA en la Red Española de Clínicas Jurídicas.

Como resultado de esta actuación avalada, se habilitó una oficina de asesoramiento en el edificio de Servicios Comunes del Campus de Jerez, que comenzó su andadura en el curso 2018/2019. En este curso, se concedió una nueva actuación avalada “La Clínica Jurídica, como forma de aprendizaje-servicio (I)”, destinada a impulsar la labor de la clínica, marcándose como objetivos:

1. Atender y dar respuesta a las consultas recibidas en la clínica jurídica.
2. Propiciar la realización de trabajos de Fin de Grado o de Máster que consistan en dictámenes o informes sobre cuestiones formuladas a la clínica o planteadas por las entidades donde se desarrollen las prácticas académicas externas.
3. Mejorar la vinculación de la Facultad con la sociedad.
4. Incentivar la participación de alumnos/as para atender la clínica en horario de atención al público, lo que redundará en beneficio de su formación práctica.

Finalmente, la Clínica Jurídica de la Universidad de Cádiz, que ha recibido la denominación de CLINUCA, entró en total funcionamiento en febrero de 2019, tomando como referente las demás clínicas jurídicas ya instauradas en otras universidades españolas. CLINUCA es una entidad vinculada a la Facultad de Derecho, a través de la cual, se pretende realizar una labor de orientación legal a ciudadanos sobre problemas jurídicos que les afecten de forma gratuita, contribuyendo así a la defensa y promoción de sus intereses. Esta clínica está dirigida a ciudadanos, ONGs y entidades benéficas o sin ánimo de lucro. En ella participan, de forma voluntaria, estudiantes que se encuentren en tercero o cuarto curso del Grado en Derecho, en quinto y sexto año del Doble Grado de Derecho y ADE, y alumnos de cuarto y quinto curso del Doble Grado en Derecho y Criminología. La labor de los estudiantes de grado puede ser reconocida con créditos ECTS.

Además, se pretende que en CLINUCA puedan realizarse las prácticas curriculares del Máster en Protección Jurídico- Social de Personas y Colectivos vulnerables y del Máster de Acceso a la Abogacía, cuando así sean ofertadas por el coordinador o coordinadora del máster.

Las funciones que se llevan a cabo en CLINUCA son, básicamente, atender y orientar sobre las consultas recibidas, pero sin efectuar una labor de asesoría profesional. Es decir, se encarga de una primera orientación, ayudando a los ciudadanos a saber qué vías tienen de actuación y a qué profesionales deben dirigirse, por lo que estamos ante una clínica jurídica de atención directa.

CLINUCA ha entrado en pleno funcionamiento con la participación de tres alumnas del Grado en Derecho que cursaban tercero y cuarto año del grado. Las tres han prestado sus servicios de forma totalmente voluntaria, pero han sido retribuidas de forma diferente. A dos de ellas su trabajo en la clínica será reconocido con seis créditos ECTS, mientras que a la tercera se le concedió una beca extracurricular con la ayuda concedida en la actuación avalada. En abril se incorporó al equipo una alumna Erasmus de nacionalidad francesa, con el fin de colaborar con estas alumnas en el funcionamiento de la clínica, pues en Francia existen multitud de Clínicas Jurídicas al ser ésta una práctica muy extendida en las universidades del país.

El equipo de alumnos – asesores de CLINUCA cuenta con la tutorización de los docentes de la Facultad de Derecho para cuando así lo requieran, realizando las tutorías necesarias para poder llegar a resolver las consultas que les han sido planteadas.

Los asuntos que han llegado han sido de diversas materias, destacando un mayor número de asuntos en materia civil y laboral. Las consultas han sido registradas en una hoja de Excel en la que se recogía el nombre de la persona que realiza la consulta, la vía por la que la plantea, la fecha de entrada y el alumno que la ha recibido. A pesar de que se ha registrado el nombre, en CLINUCA no se guarda ningún tipo de información personal más allá del nombre de la persona o entidad que formula la consulta que únicamente conocerán los alumnos de cara a atenderla debidamente.

Es importante destacar que, antes de que estos alumnos comiencen con su labor de asesoramiento en la clínica, deben firmar un compromiso de confidencialidad por el cual, únicamente ellos conocerán la identidad de las personas que acudan a la clínica y sus circunstancias. Lo único que estos alumnos comparten con sus tutores son las cuestiones relevantes para el caso, pero nunca datos personales. Por ello, las respuestas que se han ofrecido han sido siempre de forma verbal, nunca escrita, y en cumplimiento del compromiso de confidencialidad que firmaron al inicio del proyecto.

Además, a lo largo de este curso académico, el apartado web que se habilitó para la clínica jurídica dentro de la página web de la Facultad ha sido mejorada. Entre estas mejoras, cabe destacar la inclusión de un formulario de contacto mediante el cual las personas interesadas pueden realizar sus consultas cumplimentando el formulario y enviarlo, de forma que automáticamente esa consulta llega al correo electrónico de la clínica. También se ha incluido el funcionamiento de la clínica y la imagen del despacho con el logo que ha sido diseñado para CLINUCA.

IV. 1. Colaboración CLINUCA con UCAYUDA: dos proyectos con vocación de servicio a la comunidad.

Como se ha mencionado a lo largo de este trabajo el respaldo institucional de la propia universidad resulta fundamental. Por ello, en el mes de mayo se ha entablado conversaciones para integrar la clínica jurídica como una dimensión más de otro gran proyecto que la Universidad de Cádiz ha puesto en marcha: el proyecto UCAYUDA.

UCAYUDA es el proyecto encargado de formar una cooperativa formada por miembros de la comunidad universitaria con inquietudes sociales y humanitarias, que quieran contribuir y comprometerse para actuar frente a cualquier acontecimiento, ya sea sanitario, cultural, ambiental o incluso ante crisis humanitarias y territoriales que tienen lugar en nuestro entorno. Su misión es crear una bolsa de colaboradores que estén dispuestos a ayudar en estas situaciones o actuar frente a necesidades especiales, poniéndose a disposición de los organismos y organizaciones que actúen en las zonas afectadas o en los lugares donde se requiera ayuda.

En UCAYUDA se distinguen dos tipos de acciones: las acciones de emergencia y acciones programadas. Las acciones de emergencia serán aquellas que no se puedan prever, como puede ser un desastre natural o humanitario; mientras que las acciones programadas serán aquellas que estén previamente establecidas y definidas con una fecha y lugar para su ejecución. La intención de CLINUCA es poder ayudar en estas situaciones cuando se requiera la asistencia jurídica, ofreciendo a los afectados un servicio de información jurídica. Por ejemplo, informando sobre a quién habría que dirigirse en cuanto a la responsabilidad por vertidos en la costa o en materia medioambiental, informar a las personas de las diversas ayudas que tienen a su alcance y de cómo deben tramitarlas, auxilio a inmigrantes sin recursos, etc.

Esta colaboración contribuirá al crecimiento de CLINUCA en dos ámbitos. En la perspectiva externa, ampliará su campo de actuación, colaborando en desastres naturales, en acciones relacionadas con el mantenimiento del planeta, ayudando a otros colectivos y personas, etc. En relación a la perspectiva interna, se conseguirá que otros profesionales, como los trabajadores sociales, puedan conocer la labor de CLINUCA.

IV. 2. CLINUCA y los másteres universitarios de la UCA

CLINUCA tiene un firme propósito de integrar a los estudiantes del Máster de Acceso a la Abogacía, pero especialmente en el Máster de Protección jurídico-social de personas y colectivos vulnerables. Con vistas al futuro, CLINUCA persigue configurarse como una clínica de atención directa para colectivos vulnerables, de forma que los conocimientos impartidos en el Máster de Protección jurídico-social de personas y colectivos vulnerables jueguen un papel fundamental, especializándola así en un área concreta. Como aparece recogido en los requisitos de acceso al máster que se pueden consultar en la web de nuestra Facultad, este máster está destinado a graduados o licenciados

en Derecho, Trabajo Social, Relaciones Laborales, Criminología, ADE, Gestión y Administración Pública, Sociología, Educación o Psicología. Por lo que se podrían prestar en la clínica unos servicios de calidad que dé respuesta a la problemática de los distintos colectivos.

También se podría ampliar dicha colaboración al Máster Universitario en Mediación, siguiendo el ejemplo de la Clínica Jurídica de la Universidad Diego Portales (clínica jurídica UDP en adelante) que centra su trabajo en los sistemas alternativos de resolución de conflictos, como son la mediación y el arbitraje. Esta colaboración sería similar a la que se entabla entre CLINUCA y el Máster de Acceso a la Abogacía y el Máster de Protección Jurídico-Social de Personas y Colectivos Vulnerables, es decir, estaría destinada a que los alumnos realicen prácticas en CLINUCA a la vez que ofrecen un servicio a la comunidad. Mediante esta colaboración, los alumnos podrían realizar prácticas curriculares en la propia clínica, o intentando resolver algunos de los casos que llegan a nuestra clínica con los conocimientos de mediación adquiridos en el máster. Aunque en mediación se trabaja con casos de distintas materias, en los asuntos de familia o laborales podría tener un importante margen de acción, ya que algunos de los casos que han tenido entrada en la clínica.

Siguiendo el modelo de la Clínica Jurídica UDP, los alumnos que participen en este proyecto podrían ejercer los roles de pre-mediador, es decir, la persona que se pone en contacto con las partes informa y obtiene de forma voluntaria la participación de los interesados, así como de co-mediador, quien interviene en el proceso de mediación bajo la conducción de los profesores, elabora actas de cada sesión y presenta un informe cuando finaliza el caso. Por su parte, la labor de asesor jurídico, que trata de entregar información, asesorar y apoyar en aspectos jurídicos y de estrategia del caso antes y durante la mediación, asistir a las sesiones de mediación cuando fuera necesario y es el encargado de redactar y tramitar los acuerdos, sería desempeñada por los alumnos-asesores de la clínica jurídica, ya sean alumnos del Grado en Derecho o del Máster de Acceso a la Abogacía e incluso de los alumnos de Máster en Protección Jurídico-Social, cuando las circunstancias del caso requieran una mayor especialización.

A CLINUCA ha llegado un caso en materia de familia en el que se recomendaba, como forma de resolución del conflicto, la mediación. Si se aplicara esta colaboración al caso, la clínica jurídica, una vez que comunicara al interesado las posibles vías de resolución del conflicto, y el interesado accediera a la mediación, CLINUCA podría haber puesto en contacto al interesado con los alumnos del Máster para que realizaran las labores de mediadores oportunas. Para articular esta colaboración existen dos posibilidades. En primer lugar, que los alumnos que están cursando el máster realicen en CLINUCA sus prácticas y, en segundo lugar, que los alumnos que ya han finalizado sus estudios y trabajan como mediadores, desempeñen una labor de supervisión en nuestra clínica tutorizando a los alumnos del máster. De esta forma, se ofrecería un asesoramiento más completo y ofrecería mayor riqueza a las ofertas académicas de nuestra Universidad, además de ofrecer un servicio más completo en nuestra Clínica Jurídica que llegaría a más población.

V. OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS DE LAS CLÍNICAS JURÍDICAS: UN LARGO CAMINO A RECORRER.

Las clínicas jurídicas como instrumento para la docencia proporcionan al alumno el aprendizaje y la práctica necesaria para el posterior desempeño de la actividad profesional. Por ello, estas clínicas proporcionan una serie de ventajas sobre otros métodos de enseñanza, como son¹²:

- ✚ Un mejor conocimiento y más real de la realidad jurídica y de los conflictos que se suscitan en ella.
- ✚ La consolidación de los conocimientos teóricos, debido a la conexión entre los casos reales que deben resolver los alumnos y los conocimientos que ya han adquirido, o deben adquirir para poder resolverlos.
- ✚ La comprensión del Derecho como un todo, superando la visión de las áreas como compartimentos estancos. En la clínica se visualizan que las diversas ramas del ordenamiento jurídico están conectadas en las diversas situaciones que se dan en la vida cotidiana.
- ✚ El aprendizaje de la deontología de la profesión y la redacción de escritos jurídicos e informes.

Estas razones avalan la existencia de clínicas jurídicas como una excelente oportunidad para la preparación del estudiante de cara a su incorporación a la vida laboral. Además, tal y como se ha estado mencionado a lo largo del presente trabajo, las clínicas jurídicas son una vía para que las Universidades desempeñen la función social que le ha sido encomendada, por lo que, al incluir las clínicas dentro de las universidades, se estarán formando a juristas implicados en dicha función.

En definitiva, la enseñanza clínica es una opción idónea para formar a los alumnos en la práctica del Derecho. Sin embargo, en la actualidad hay dos problemas que dificultan su anclaje: el posible desinterés del alumnado en participar en este método de aprendizaje y el desconocimiento generalizado sobre su alcance. El primer escollo está motivado en el complejo encaje de estos programas dentro de los planes académicos de la Universidad, aunque podría superarse con una adecuada planificación de las actividades y un mayor reconocimiento académico por la participación en las mismas. Por lo que respecta al desconocimiento, resulta llamativo que la desinformación no se refiere sólo de las personas y colectivos externos a la universidad, sino a los mismos docentes que no están al tanto de la finalidad de éstas. Es necesario realizar cierta labor pedagógica y de difusión, pero ahondando en la finalidad de estas prácticas para conseguir los apoyos institucionales necesarios de cara a mejorar y dar continuidad a las clínicas ofreciendo los mejores servicios posibles.

¹² Así es puesto de relieve en Ramiro, M.A., Cembellín, M., Guerra A., “Implantación de un programa de Clínica Jurídica”, Memoria justificativa de las Actividades Desarrolladas en el Proyecto de Innovación Docente Implantación de un Programa de Clínica Jurídica aprobada por el Vicerrectorado de Calidad e Innovación Docente de la Universidad de Alcalá. Disponible en: <http://derecho.uah.es/facultad/documentos/Memoria-Justificativa-CL.pdf>

Las clínicas jurídicas constituyen una gran oportunidad de colaboración entre la universidad y el mundo profesional, alejándose de la mercantilización que han sufrido las profesiones en el ámbito jurídico. Además, la educación jurídica clínica impulsa el papel que desempeña la universidad y la enseñanza universitaria en la comunidad, basando el rol de los juristas en cualidades como la solidaridad y el compromiso con los problemas actuales de la sociedad. Debido a estas ventajas que ofrecen las clínicas jurídicas, el movimiento clínico global se está posicionado para liderar una reforma de la educación jurídica que identifique y enseñe buenas prácticas.

En base a todo lo expuesto a lo largo de este trabajo, la educación jurídica clínica tiene la intención de formar juristas mejor preparados y con una mejor educación en valores para que sean conscientes de la responsabilidad social y de los deberes que conlleva el buen ejercicio de su profesión. Para lograr ese objetivo, las clínicas jurídicas facilitan el compromiso del estudiante con su proceso de aprendizaje fomentando su autonomía y haciendo que trabajen en una visión crítica del Derecho.

Es cierto que los programas de las clínicas pueden ser muy diversos y de cualquier temática jurídica, pero lo importante es elegir el proyecto según las necesidades concretas de las instituciones que estén implicadas y cuenten con un componente de interés público para poder alcanzar el objetivo de sensibilizar sobre la responsabilidad social y la deontología profesional.

La educación clínica jurídica busca no sólo tener impacto en la calidad de la formación y la capacitación de los estudiantes de Derecho, sino también tener un impacto social favoreciendo la lucha por los derechos y, especialmente, sobre el acceso a la justicia, la no discriminación de los colectivos vulnerables y el buen funcionamiento del Estado de Derecho. El componente novedoso y desconocido de las clínicas hace necesario analizar los desafíos deben hacer frente para cumplir con sus objetivos.

En primer lugar, atendiendo a la historia de las clínicas jurídicas, podemos observar cómo el crecimiento de estas clínicas depende en gran medida de la financiación que éstas obtengan. Por esta razón, el objetivo principal de las clínicas jurídicas y, por tanto, del movimiento clínico global debe ser hallar el modo de conseguir la institucionalización de la educación jurídica clínica dentro del plan de estudios de todas las Facultades de Derecho. Para ello, podría establecerse una estrategia dividida en tres partes: primeramente, cambiar los planes de estudios de las facultades de Derecho a nivel nacional incluyendo alguna asignatura clínica en el plan de estudios, a través de estos programas los estudiantes pueden aprender cómo integrar el conocimiento jurídico, habilidades y los valores. Si estos cursos fueran voluntarios, algunos estudiantes finalizarán sus estudios con lagunas importantes en su educación jurídica. En este sentido, los programas clínicos pueden desempeñar un papel clave abordando este desafío, puesto que se centra en la preparación de futuros juristas para el ejercicio del derecho de un determinado país. La forma de preparación puede variar, es decir, puede incluir litigación, resolución alternativa de conflictos, divulgación jurídica, etc. De igual forma, los estudiantes pueden trabajar desde distintas posiciones: haciendo el rol de

abogado, de procurador, en grupos de presión e incluso ejerciendo las funciones de los funcionarios públicos.

Otro reto pasa por la contratación y formación miembros permanentes del profesorado de las facultades de Derecho, que sean capaces de responsabilizarse estos cursos clínicos.

Un último desafío que afronta la educación jurídica a nivel mundial, no sólo nacional, es cómo preparar a los estudiantes con el conocimiento, habilidades y los valores para llevar a cabo los distintos roles de las áreas jurídicas.

En mi opinión, como alumna-asesora de CLINUCA, la clínica jurídica es una experiencia enriquecedora, pues no sólo aporta conocimientos y acrecienta las ganas de aprender para poder ayudar y responder correctamente a las cuestiones que se plantean, sino que aporta conciencia social. Una vez que comienzas a atender consultas, abres los ojos y eres consciente de que las teorías y casos prácticos de las clases teóricas y prácticas son más frecuentes de lo que podemos imaginar, y que debemos estudiar no sólo para superar exámenes y obtener un título, sino para entenderlo y aprender a resolver las distintas cuestiones que se suscitan en la realidad. Quizás un abogado no tiene en sus manos la vida de una persona de forma tan extrema como puede tenerla un cirujano en un quirófano, pero la defensa que hace un abogado de su cliente puede hacer tambalear su vida y darle un vuelco, tanto para su beneficio como para su perjuicio, y esto no es algo que se aprenda únicamente con conocimientos teóricos, es algo que se aprende viviéndolo y trabajando en ello. Por ello, considero que la clínica jurídica es un buen método pues, sin salir de la universidad y en un entorno controlado, los estudiantes comienzan a familiarizarse con el trato a las personas que necesitan soluciones para resolver cuestiones jurídicas que les afectan y aprenden a resolver cuestiones jurídicas.

Se puede concluir que la educación jurídica clínica ha avanzado mucho en los últimos años, pero está lejos de ser un modelo consolidado, requiriéndose para ello un mayor compromiso de las instituciones implicadas.

RELACIÓN BIBLIOGRÁFICA

- Barranco Avilés, M. C., De Asís Roig, R., Iglesias Garzón, A., (2014). *Estudio sobre el pro bono en la Comunidad de Madrid*, Madrid: Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.
- Berbec-Rostas, M., Gutinikov, A., Namyslowska-Gabrysiak, B. (2013). “Los programas de enseñanza jurídica clínica en el Centro y Este de Europa. Selección de casos prácticos”. En Bloch F.S., *El Movimiento Global de Clínicas Jurídicas: Formando Juristas en la Justicia Social*. Valencia: Tirant lo Blanch, pp. 117 - 136.
- Blázquez Martín, D., Cuenca Gómez, P., Iglesias Garzón, A. (2014). *Guía sobre cómo crear, organizar y conducir una Clínica Jurídica en una Facultad de Derecho*, Madrid: Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.
- Blázquez Martín, D., “Apuntes acerca de la educación jurídica clínica”, pp. 43-60. Disponible en: www.revistauniversitas.org
-, (2013). *El Proceso de Bolonia y el Futuro de la Educación Jurídica Clínica en Europa: una Visión desde España*. En Bloch F.S., *El Movimiento Global de Clínicas Jurídicas: Formando Juristas en la Justicia Social*. Valencia: Tirant lo Blanch, pp. 201 – 216.
- Bloch, F. S. (2013), *El Movimiento Global de Clínicas Jurídicas: formando juristas en la justicia social*, Tirant lo Blanch.
- Bloch, F. S., Madhava Menon, N.R. (2003). *El Movimiento Clínico Global*. En Bloch, F.S., *El Movimiento Global de Clínicas Jurídicas: formando juristas en la justicia social*, p. 393- 406. Valencia: Tirant lo Blanch.
- Bloch, F. S., Noone, M.A. (2003). *Los Orígenes de la Educación Clínica como Asistencia Jurídica Gratuita*. En Bloch, F.S., *El Movimiento Global de Clínicas Jurídicas: formando juristas en la justicia social*, pp. 243 – 259. Valencia: Tirant lo Blanch.
- Cody, A., Schatz, B. (2003). *Clínicas Jurídicas Comunitarias. Enseñar a los estudiantes y trabajar con comunidades desfavorecidas*. En Bloch, F.S., *El Movimiento Global de Clínicas Jurídicas: formando juristas en la justicia social*, pp. 261 - 281. Valencia: Tirant lo Blanch.
- Courtis, C. (2007), “La educación clínica como práctica transformadora”, Ginebra, septiembre de 2007. Disponible en: https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjH-42Lt8DiAhVB7eAKHRjyDNkQFjAAegQIBxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.u-cursos.cl%2Fderecho%2F2012%2F1%2FD170A0635%2F8%2Fmaterial_docente%2Fbajar%3Fid_material%3D421734&usg=AOvVaw30adZiB3zDwEdEox-r-Oi8

De Prada Rodríguez. M., Callejo Carrión. S., López de la Osa Escribano. P. (2014). *La Clínica jurídica Villanueva: Función Social y pedagógica del aprendizaje del Derecho*. Disponible en: <http://revistareduca.es/index.php/reduca-derecho/article/view/1851>

García Añón, J. (2015), "La evolución de la Educación Jurídica Clínica en España". *Revista de educación y Derecho*, número 11, marzo.

García Añón, J. (2014), *La integración de la educación jurídica clínica en el proceso formativo de los juristas*. *Revista de docencia Universitaria*, vol. 12 (3), número extraordinario, pp. 153 – 175.

..., (2013). *Transformaciones en la docencia y el aprendizaje del Derecho: ¿La educación jurídica clínica como elemento transformador?*, Actas Del Quinto Congreso Nacional De Docencia en Ciencias Jurídicas, Valencia, 11-13 de septiembre.

Giddings, J., Burridge, R., Shelley, A.M., Gavigan, Klein F., C. (2013): *La primera Ola de educación jurídica clínica moderna. Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá y Australia*. En Bloch F.S., *El Movimiento Global de Clínicas Jurídicas: Formando Juristas en la Justicia Social*. Valencia: Tirant lo Blanch, pp. 55 – 78.

Mestre i Mestre, Ruth M. (2018). *Guía práctica para la enseñanza del Derecho a través de las Clínicas Jurídicas*, Valencia: Tirant lo Blanch.

Sánchez García, M. L., Velerdas Peralta, Á., Borja Alcaraz Riaño. A. (2011). *Estrechando el vínculo alumno- sociedad: la Clínica Jurídica como método de enseñanza práctica del Derecho*, Murcia, Cátedra de Economía Social - Universidad de Murcia. Disponible en: https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjx3s20vcDiAhUt3uAKHQqGAScQFjAAegQIABAC&url=https%3A%2F%2Fweb.ua.es%2Fes%2Fice%2Fjornadas-redes-2011%2Fdocumentos%2Fposters%2F184264.pdf&usg=AOvVaw2paOR3Gk0q48zAQ_IH Luhg

Witker. J. (2007), "La enseñanza clínica como recurso de aprendizaje jurídico". *Academia. Revista sobre enseñanza del Derecho*, año 5, número 10, pp. 181 – 207.

ANEXOS.

1. Propuesta de Convenio marco de colaboración entre el Consejo General de la Abogacía y la Conferencia de Rectores de las Universidades españolas en representación de las clínicas jurídicas de las Universidades españolas



CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE EL CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA Y LA CONFERENCIA DE RECTORES DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS EN REPRESENTACIÓN DE LAS CLÍNICAS JURÍDICAS DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS

En , a de 2018

REUNIDOS

De una parte, D^a. Victoria Ortega, Presidenta del Consejo General de la Abogacía Española (en adelante, CGAE), Corporación de Derecho público, con CIF Q 2863006-I y con domicilio en el Paseo de Recoletos, n^o 13 de Madrid, en uso de las facultades conferidas en el artículo ... del Estatuto General de la Abogacía Española.

Y

De otra, el Sr. Roberto Fernández Díaz, Presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades españolas (en adelante, Crue Universidades Españolas), entidad con CIF G 81093072 y domicilio social en Plaza de las Cortes 2, planta 7 de Madrid, en representación de ésta y conforme establecen sus propios Estatutos.

Ambas partes se reconocen mutuamente la capacidad legal necesaria para formalizar el siguiente convenio, y a tal efecto

MANIFIESTAN

- I. Que el CGAE es el órgano representativo, coordinador y ejecutivo superior de los 83 Colegios de Abogados de España y entre sus misiones fundamentales está la ordenación del ejercicio profesional de los abogados, velar por el prestigio de la profesión, exigir a los Colegios de Abogados y a sus miembros el cumplimiento de los deberes profesionales y deontológicos y trabajar para alcanzar una justicia más ágil, moderna y eficaz, y también comprometida socialmente a través del ejercicio pro bono.
- II. Que Crue Universidades Españolas es una asociación sin ánimo de lucro de ámbito nacional, constituida el mes de diciembre de 1994, inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones con el número 145253 integrada por Universidades públicas y privadas españolas que se asocian a tenor de la Ley Orgánica 11/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, del Real Decreto 1497/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Nacional de Asociaciones y de sus relaciones con los restantes registros de asociaciones y normas complementarias de aplicación. Tal y como refleja el Preámbulo de sus Estatutos, promueve la reflexión sobre las finalidades y problemas universitarios, orientando sus planteamientos con criterios que van más allá de los intereses de sectores o grupos particulares.
- III. Que en el presente Convenio ambas intervienen representando los legítimos intereses de los Colegios de Abogados, de un lado, y de las Clínicas Jurídicas de las Universidades asociadas a Crue, de otro, a fin de establecer un Convenio marco de colaboración que sirva de base a las relaciones que puedan entablarse entre los Colegios de Abogados y las Clínicas Jurídicas de las Universidades españolas, sustentadas en la función social de la abogacía. Con ello, se persigue reforzar la educación en valores y responsabilidad social de los estudiantes de las Facultades en las que se imparten estudios de Grado y Posgrado de Derecho facilitando la formación práctica de los



estudiantes a través de la participación en actividades de responsabilidad social y en casos pro bono relativos a personas y a grupos en situación de vulnerabilidad, tutelados por abogados y supervisados por profesores.

Todo ello sin perjuicio de las previsiones de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, a cuyo ámbito se producirá la oportuna remisión en los casos procedentes.

Y, en todo caso, salvaguardando la autonomía de los Colegios y las Clínicas para la firma de los respectivos convenios que en su caso se lleven a cabo en desarrollo del presente convenio.

En su virtud, las partes firmantes acuerdan la formalización del presente Convenio de conformidad con las siguientes

CLÁUSULAS

I.- Objeto del convenio

Constituye el objeto del presente Convenio establecer un marco de colaboración entre el CGAE y Crue Universidades Españolas, que pueda servir de base para las relaciones entre los Colegios de Abogados y las Clínicas Jurídicas de las Universidades españolas, en virtud del cual los estudiantes de Derecho podrán participar en la realización de diversas actividades, siendo en todo momento tutelados por profesionales de la abogacía voluntarios y supervisados por docentes, y cuyo contenido comprenderá la formación práctica de dichos estudiantes mediante su participación en actividades de responsabilidad social y en casos pro bono relativos a personas y a grupos en situación de vulnerabilidad tutelados por abogados y supervisados por profesores.

Todo ello sin perjuicio de los supuestos amparados por la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, a cuyo ámbito se producirá la oportuna remisión en los casos procedentes.

Este convenio no es exclusivo ni excluyente de otras opciones que en materia pro bono puedan articular el CGAE o las Clínicas Jurídicas de las Universidades españolas.

II.- Compromisos de Crue Universidades Españolas, en representación de las Clínicas Jurídicas de las Universidades españolas

Las Clínicas Jurídicas de las Universidades españolas, asociadas a Crue Universidades Españolas, en la medida de sus posibilidades, propondrán a los Colegios de Abogados integrados en el CGAE casos de interés comunitario que podrán ser objeto de la actividad formativa, seleccionarán al personal que supervisará la actividad formativa de los estudiantes, y prepararán el material para impartir sesiones de formación cuando ésta no sea procurada por el Colegio de Abogados respectivo. Asimismo, se comprometen a supervisar el desarrollo de las actividades realizadas por los estudiantes en el marco del presente Convenio, y a velar a fin de que las actividades se realicen correctamente y con la máxima diligencia posible, poniendo para ello también a disposición las instalaciones y los medios adecuados.

La Clínica Jurídica seleccionará al personal docente que supervisará la actividad formativa y a los estudiantes que participarán en las actividades, y lo comunicará al Colegio de Abogados con el que colabore para la correcta planificación de las mismas.

III.- Compromisos del CGAE, en representación de los Colegios de Abogados

Los Colegios de Abogados, representados por el Consejo General de la Abogacía, a través de sus Centros de Responsabilidad Social, se comprometen, como centros de intermediación, a procurar profesionales de la abogacía voluntarios que reúnan los requisitos de idoneidad exigidos para esta causa y a proponer casos pro bono a la Clínica Jurídica cuando las características del mismo así lo requieran.



La decisión del nombramiento o designación de profesionales de la abogacía voluntarios para la Clínica Jurídica corresponde exclusivamente al Colegio, sin que éste, en ningún caso, asuma responsabilidad alguna por la actuación profesional de los profesionales de la abogacía voluntarios finalmente designados, que desarrollarán su función con absoluta libertad e independencia y con estricta observancia de las normas deontológicas.

Por consiguiente, el Colegio no responderá en ningún caso del contenido y calidad de los servicios jurídicos prestados por los profesionales de la abogacía voluntarios ni, por tanto, de la diligencia o solvencia profesional de los abogados y las abogadas que procuren actividad *pro bono*.

IV.- Principios de actuación

Ambas partes actuarán y se relacionarán en todo momento de acuerdo con los principios de buena fe y de confianza legítima.

V.- Gratuidad

Todas las actividades que recaigan bajo este marco de colaboración entre los Colegios de Abogados y las Clínicas Jurídicas se realizarán a título gratuito, luego sin contraprestación alguna, ni directa ni indirecta.

Las Partes declaran que no existe, ni se crea en virtud de la ejecución del presente Convenio, relación de dependencia alguna ni vínculo laboral, común o especial, ni arrendamiento de servicios civil, ni entre ellas, ni entre la Universidad a la que pertenezca la Clínica Jurídica y los profesionales de la abogacía voluntarios que el Centro de Responsabilidad Social del Colegio de Abogados designe para colaborar con la Clínica Jurídica en las distintas actividades.

VI. Colaboración o participación de entidades sin ánimo de lucro en el programa de las Clínicas jurídicas

En caso de colaboración de la Clínica Jurídica con proyectos de entidades sin ánimo de lucro en los que se prevean servicios (*pro bono*), el Colegio de Abogados correspondiente, la Universidad a la que pertenezca la Clínica Jurídica y la entidad colaboradora determinarán las condiciones de esta colaboración en un convenio entre todas las partes o un protocolo de actuación, especialmente cuando estos servicios se presten en las instalaciones y con los medios de la entidad y participe personal voluntario de esta.

VII.- Comisión de seguimiento

Se constituirá una Comisión de Seguimiento, integrada por, al menos, un representante designado por cada parte.

La Comisión de Seguimiento se reunirá cuando lo solicite alguna de las partes, ya sea de forma presencial, ya sea por medios telemáticos o electrónicos. Estos representantes se designan en el Anexo I de este Convenio.

VIII.- Vigencia

Este convenio entrará en vigor desde la fecha de su firma y se mantendrá vigente hasta la finalización del año académico en curso y será prorrogable, por períodos iguales, salvo denuncia por escrito de alguna de las partes con una antelación mínima de un mes a la fecha de finalización.

Este convenio se extinguirá por cualquiera de las siguientes causas:

- El mutuo acuerdo de las partes signatarias.
- La expiración del plazo de duración inicial o de la prórroga, previa denuncia con una antelación de 1 mes a la fecha de finalización.



- La decisión de una de las partes signatarias del presente Convenio previa denuncia expresa y por escrito a la otra parte con una antelación de 1 mes.

En todo caso, las actividades que estuvieran en curso continuarán hasta su completa finalización.

IX.- Confidencialidad

Las partes se comprometen de manera expresa, tanto durante la vigencia del contrato, como después de su extinción, a no difundir, transmitir, revelar a terceras personas cualquier información a la que tengan acceso como consecuencia del desempeño de las actividades, ni a utilizar tal información en interés propio o de sus familiares o personas con las que mantenga relación de amistad o análoga.

Asimismo, tendrán carácter absolutamente confidencial todos los documentos, informes y cualesquiera otras notas elaborados durante el desarrollo de las actividades y serán diligentemente custodiados por las partes implicadas.

La Clínica Jurídica informará a los estudiantes que participen en el proyecto que vendrán obligados a guardar la más absoluta confidencialidad sobre cualquier información que obtengan en el ámbito de su participación en las actividades propuestas por la Clínica y el Colegio de Abogados.

X.- Protección de datos

Las partes se comprometen a tratar los datos personales de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, Reglamento General de Protección de Datos, y en la normativa aplicable en la materia.

Las partes se comprometen a informar a los titulares de los datos de los fines para los que se van a tratar sus datos, así como recabar los consentimientos necesarios para poder tener la legitimidad de acuerdo con el Art 6 del Reglamento.

Las partes informarán a su personal, colaboradores y subcontratistas de las obligaciones establecidas en la presente cláusula de confidencialidad y protección de datos.

Por tanto, las partes se comprometen a no difundir de ninguna forma la información a la que hayan podido tener acceso durante las colaboraciones a que se refiere el presente Convenio, sin que conste autorización expresa de la otra parte, mientras esas informaciones no sean de dominio público o su revelación sea requerida judicialmente.

Se considerará información confidencial cualquier información a la que las partes accedan en virtud de este Convenio, en especial la información y datos propios de las partes que con tal carácter se indique, a los que hayan accedido durante la ejecución del mismo, así como la documentación que se aporte.

XI.- Publicidad

Las actividades objeto del presente convenio, basadas en la función social de la abogacía y el ejercicio pro bono, no tendrán fines comerciales directos, ni promocionales y/o reputacionales, por lo que su comunicación externa no tendrá como objetivo la publicidad corporativa ni la búsqueda directa o indirecta de generación de clientela, alumnado o cualquier otra actividad lucrativa u onerosa. La promoción de esta colaboración debe ceñirse exclusivamente a una escueta exposición que garantice que los posibles beneficiarios conozcan la existencia de los distintos proyectos y puedan solicitar, en su caso, acogerse a ellos.



Las partes no podrán hacer uso del logotipo de la otra, salvo permiso expreso previo, y siempre éste sujeto a la actividad pro bono concreta.

XII.- Seguro

La Universidad en la que se integre la Clínica Jurídica garantiza en todo caso la cobertura obligatoria de seguros de accidentes y la complementaria de responsabilidad civil de los estudiantes que participen en las actividades realizadas al amparo del presente convenio, comprometiéndose a suscribir aquellas pólizas de seguro que fuesen necesarias.

Los profesionales de la abogacía voluntarios y las Entidades No Lucrativas serán cubiertos por sus propios seguros quedando el Colegio de Abogados totalmente exento de cualquier responsabilidad no contemplada en los seguros de RC y de accidentes contratados por el Colegio para el ejercicio del pro bono por sus colegiados voluntarios.

XIII.- Modificación del convenio

Las partes podrán modificar las cláusulas del presente convenio y las actividades descritas en él, si así lo consideran conveniente, por mutuo acuerdo.

XIV.- Resolución del convenio

Este Convenio podrá ser resuelto por las siguientes causas:

1. Por el incumplimiento de los compromisos y obligaciones establecidos en el presente convenio, notificándose, al menos, con veinte días (20) de antelación a la otra parte.
2. Por imposibilidad sobrevenida de realización de las actividades objeto del presente convenio.

XV.- Resolución de conflictos

Este Convenio tiene naturaleza privada y las entidades firmantes se comprometen a resolver de manera amistosa cualquier desacuerdo que pueda surgir en el desarrollo del mismo.

En caso de que persista la discrepancia en la resolución del conflicto, las partes acuerdan que todo litigio, discrepancia, cuestión o reclamación resultantes de la ejecución o interpretación del presente Convenio o relacionados con él, directa o indirectamente, en caso de que no se llegara al acuerdo deseado en el seno de la Comisión de seguimiento, se resolverán definitivamente mediante Arbitraje de Derecho, que se designará por las partes de común acuerdo. Igualmente, las partes hacen constar su compromiso de cumplir el laudo arbitral que se dicte.

Y para que conste a los efectos oportunos, en prueba de conformidad, las partes firman el presente documento por duplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha arriba citados.

Presidenta Consejo General de la Abogacía

Presidente Crue Universidades Españolas

2. Propuesta de Reglamento de Funcionamiento de CLINUCA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La idea de crear una Clínica Jurídica nace de la necesidad de implementar la función social que tiene encomendada toda Universidad pública. La Clínica Jurídica es un espacio de aprendizaje donde los estudiantes que participen en la misma pondrán en práctica los conocimientos adquiridos a lo largo de los estudios del Grado mediante la realización de prácticas reales con personas y casos reales, siempre bajo el asesoramiento, tutorización y supervisión de profesores universitarios y profesionales del Derecho. Mediante esta metodología de trabajo, se consigue, por un lado, que los alumnos trabajen en la adquisición de las competencias y habilidades que debe tener todo profesional del Derecho; por otro, se pretende conseguir unos juristas comprometidos socialmente y sensibilizados con las desigualdades sociales y en la lucha contra las injusticias, es decir, obtener juristas con una mayor conciencia social.

CLINUCA, la denominación que ha recibido nuestra Clínica Jurídica nace en el curso 2018-2019 como una actividad formativa complementaria a la que los alumnos se apuntan voluntariamente con posibilidad del reconocimiento de créditos ECTS. En nuestra clínica jurídica los casos más complejos sirven de base para la elaboración de Trabajos Fin de Grado y de Máster, que los estudiantes deben realizar para terminar sus estudios de grado y postgrado, y que consistirán en dictámenes e informes sobre las cuestiones planteadas.

Ambos términos, clínica jurídica y educación jurídica clínica, están vinculados al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y a la mejora y renovación en la docencia que éste ha impulsado. Desde sus inicios, la educación jurídica clínica ha estado vinculada a la asistencia jurídica gratuita y, por tanto, a la prestación de servicios y prácticas jurídicas gratuitas a las personas con menos recursos de nuestra sociedad. Este hecho pone de manifiesto la estrecha conexión que existe entre el movimiento clínico y la justicia social. Este vínculo se ha consolidado con el paso del tiempo y, a día de hoy, el movimiento de clínicas jurídicas está orientado a potenciar el vínculo del proceso de formación del jurista, con el compromiso por el interés público y la justicia social,

implementando así la sensibilidad social del futuro profesional y fortaleciendo los valores éticos en los que se basa su profesión.

En este contexto, la Facultad de Derecho de la Universidad de Cádiz, se compromete a impulsar la participación de la comunidad universitaria en experiencias y proyectos que promuevan la transformación social, mediante la puesta en práctica de experiencias de aprendizaje-servicio que pretende ser la Clínica Jurídica.

CAPÍTULO I

DENOMINACIÓN, REPRESENTACIÓN, OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

Artículo 1. La Clínica Jurídica y la Facultad de Derecho

1. La Clínica Jurídica de la Universidad de Cádiz se integra en la Facultad de Derecho del Campus de Jerez con una triple finalidad: como espacio formación, como proyecto de innovación docente y como servicio a la comunidad en cumplimiento de la función social que deben ejercer la Universidad pública.
2. La Clínica Jurídica se localiza en el Despacho 1.005 del Edificio de Servicios Comunes del Campus de Jerez.

Artículo 2. Representación

El Decano/a de la Facultad de Derecho, mediante delegación del Rector/a, está facultado para firmar los acuerdos o convenios que CLINUCA pueda suscribir con diversas entidades y organismos para el desarrollo de las competencias desempeñadas por la clínica.

Artículo 3. Objetivos

1. Promover y mejorar el aprendizaje activo y la formación práctica de los alumnos de la Facultad de Derecho mediante el desarrollo de habilidades profesionales.
2. Defender los derechos de las personas y colectivos menos favorecidos, en riesgo de exclusión social o que hayan sufrido algún tipo de discriminación o trato vejatorio.

3. Asesorar a personas discapacitadas, con escasos recursos económicos, o con dificultades para poder acceder a un asesoramiento jurídico de calidad, para la defensa de sus derechos e intereses.
4. Promover la conciencia social del alumnado, los valores éticos y el compromiso en la defensa de los derechos humanos.
5. Mejorar la relación de la Universidad con la sociedad, promoviendo la acción social que le ha sido encomendada a la Universidad pública.
6. Mejorar la colaboración entre las instituciones académicas y los diversos profesionales del derecho.

Artículo 4. Metodología

Para la consecución de los objetivos mencionados en el artículo anterior, se llevarán a cabo las siguientes actividades:

1. La realización de acciones formativas, informativas y de difusión jurídica o *Street law* que sirvan para la consecución de los objetivos de la Clínica, tales como seminarios, talleres de trabajo, jornadas, encuentros o cualquier otra análoga.
2. Elaboración de documentación de naturaleza técnico-jurídica que recoja el resultado del análisis o estudio jurídico llevado a cabo en la clínica que, en función del tipo de demanda planteada, podrá ser, entre otras:
 - a. Respuestas a breves consultas jurídicas.
 - b. Dictámenes sobre consultas.
 - c. Protocolos de actuación ante la violación derechos.
 - d. Guías divulgativas de derechos y deberes.
 - e. Informes de sensibilización, formación y acompañamiento a las necesidades y procesos de las organizaciones sociales, operadores jurídicos, despachos e instituciones con las que se colabora.
 - f. Propuesta de recomendación o norma jurídica dirigida a entidades públicas.

3. La elaboración de textos formativo-pedagógicos o cualquier otro material que sirva para el aprendizaje de la metodología de educación jurídico-clínica.
4. La elaboración de convenios y acuerdos de colaboración con instituciones y entidades que sirvan a la realización de los objetivos de la Clínica.
5. La colaboración con otras clínicas universitarias, españolas o extranjeras.
6. La participación en proyectos de investigación, nacionales e internacionales, redes de instituciones y movimientos clínicos que compartan los mismos objetivos.
7. Cualesquiera otras actividades que sirvan a los objetivos de la Clínica.

CAPÍTULO II

MODALIDADES Y ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

Artículo 5. Modalidades de clínica

CLINUCA actuará como:

1. Clínica de interés público: esta modalidad se refiere a aquellos casos en los que las clínicas jurídicas deciden intervenir debido al interés que el asunto pueda tener en su entorno social, como podrían ser procesos relacionados con los derechos humanos.
2. Clínica de interés particular o atención directa: se trata de la sección de la clínica jurídica que trabaja cerca de los particulares que acuden, intentando resolver los conflictos o cuestiones que planteen, primando el interés particular de quien acude a la clínica.
3. Clínica de vulnerables: ésta se encarga de la atención de personas o colectivos considerados “vulnerables” por la sociedad, es decir, niños, mujeres, ancianos, desempleados o personas en riesgo de exclusión social.

Para cada modalidad, el Comité Directivo aprobará un protocolo de actuación que se remitirá a la Junta de Centro.

Las modalidades de clínica podrán reducirse o ampliarse en atención a las circunstancias o necesidades de la población, siempre que lo estime conveniente el comité directivo de la misma.

Artículo 6. Estructura organizativa

El equipo de miembros que participa y desarrolla el proyecto de Clínica Jurídica CLINUCA se estructura en los siguientes órganos:

- Un director/a general y, en su caso, un director un director/a de clínica por modalidad.
- Un comité directivo, conformado por el coordinador/a del Grado en Derecho, el coordinador/a del Máster de Protección Jurídico-Social de Personas y colectivos vulnerables, un profesor docente de las siguientes áreas: Derecho administrativo, civil, constitucional, internacional, laboral, mercantil penal y tributario; un estudiante-asesor/a de la clínica y un profesional del Derecho.
- Estudiantes- asesores.

Artículo 7. Funciones y competencias de la dirección general

El director o directora general será el responsable del Proyecto de Innovación Educativa.

Entre sus funciones, tiene atribuidas las siguientes:

1. Dirigir la Clínica supervisando y asignando equipos de trabajo y profesores-tutores a las consultas o casos recibidos.
2. Promover e impulsar la creación de convenios y acuerdos de colaboración.
3. Promover e impulsar la formación necesaria en cada momento, para poder ofrecer la mejor respuesta a las consultas y convenios suscritos.
4. Supervisar el cumplimiento de los objetivos establecidos, pudiendo realizar los cambios necesarios en cada momento para ello.
5. En general, velar por el buen funcionamiento de la clínica.

El cargo de director general tendrá una duración de dos años, pudiendo ser renovado por períodos iguales. Será designado por el/la Decano/a .

El director o directora general podrá ser sustituido/a por el/a coordinador/a de Grado cuando sea necesario.

Artículo 8. Funciones y competencias del comité directivo

El comité tiene atribuidas las siguientes funciones:

1. Aprobar los protocolos de actuación.
2. Resolver los conflictos y discrepancias que puedan plantearse.
3. Proponer la reforma del presente reglamento.

El comité se reunirá periódicamente, a petición de cualquier de sus miembros y, al menos, una vez al trimestre. De cada reunión se levantará un acta que reunirá la relación de asistentes y los acuerdos adoptados. Esta acta será archivada para su inclusión en la memoria de la Clínica Jurídica.

Artículo 9. Derechos y obligaciones de los estudiantes y asesores

Los estudiantes y asesores que participen en la clínica tendrán las siguientes obligaciones:

1. Asistir a las sesiones de formación obligatorias que se organicen.
2. Estudiar los casos que les sean asignados y resolverlos con la debida diligencia.
3. Trabajar en equipo siguiendo las recomendaciones de los tutores.
4. Cumplir con el número de horas de presencia en la Clínica, así como atender la oficina durante las horas que les hayan sido asignadas.
5. Observar la debida confidencialidad de los datos aportados por los clientes u obtenidos en relación con los casos en los que esté participando o se hayan resuelto en la Clínica.
6. Conservar y custodiar las instalaciones y el material que tengan a su disposición, así como el archivo y los documentos elaborados o aportados a los expedientes.

Los estudiantes y asesores tendrán los siguientes derechos:

1. Derecho a la formación previa y continua para la resolución de los casos en las materias previstas.

2. Derecho a la asistencia y supervisión de uno o varios tutores para la elaboración de contestaciones a consultas, informes jurídicos o memorias solicitados.
3. Derecho a ser evaluado conforme a las normas propuestas por el equipo de la clínica.
4. Derecho a un uso adecuado de las instalaciones y medios materiales de la clínica.

Artículo 10. Funcionamiento de la clínica

El funcionamiento de la clínica se regirá por las siguientes normas:

1. Recepción del caso: se hará mediante la cumplimentación del formulario de contacto que se encuentra en la web (<https://derecho.uca.es/clinica-juridica/>), por correo electrónico (clinica.juridica@uca.es), por teléfono (956037894) o, directamente, en la oficina de atención sita en el Despacho 1.005 del Edificio de Servicios Comunes del Campus de Jerez, para la cual se recomienda concertar cita previa.
2. Asignación del caso: las consultas recibidas serán asignadas a un equipo de trabajo o a un solo estudiante o voluntario, en función de la complejidad de la cuestión.
3. Tutoría del caso: el profesor-tutor contactará con el equipo de trabajo en el plazo máximo de 24 horas y, a partir de ese momento, dará las instrucciones precisas para el estudio de la consulta planteada y la elaboración de una propuesta de resolución.
4. Resolución: el plazo máximo recomendado para la resolución del caso es de diez, contados a partir de la adjudicación del caso a un equipo de trabajo y profesorado- tutor, dentro de los cuales el tutor deberá efectuar las correcciones necesarias a las propuestas elaboradas por el equipo de trabajo, hasta su redacción definitiva.
5. Formalidades: el informe o consulta se ajustará al formato previsto, en cumplimiento con el reglamento de identidad audiovisual de la Universidad de Cádiz.
6. Entrega de la respuesta: se efectuará de forma oral, por la misma persona o equipo que atendió la consulta. El documento-respuesta deberá enviarse a la dirección de la clínica para archivarlo.

Artículo 11. Funcionamiento de la Clínica en los casos de elaboración de informes y memorias.

El funcionamiento de esta clínica se regirá por las normas que se adopte el comité directivo.

Artículo 12. Modificación del Reglamento de Funcionamiento.

El comité directivo podrá proponer la reforma del presente reglamento, previa aprobación de su necesidad por la mayoría de sus miembros.

3. Formulario de contacto y funcionamiento CLINUCA



Despacho 54, Edificio Servicios Comunes
Avenida de la Universidad, nº 4 | 11.406 Jerez de la Frontera
Tel. 956 037 894
<http://www.usa.es>
clinica.sandrafuca.es

FORMULARIO DE CONTACTO

NOMBRE	
APELLIDOS	
TELÉFONO	
EMAIL	

OBJETO DE LA CONSULTA, solicita orientación respecto a la siguiente cuestión / supuesto:	

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

1. La Clínica Jurídica de la Universidad de Cádiz (en adelante CLINUCA), ofrece un servicio de atención y orientación sobre las consultas recibidas, pero sin efectuar una labor de asesoría profesional. Se encarga de una primera orientación, indicando los siguientes pasos a seguir.
2. La atención está a cargo de estudiantes de los últimos cursos del Grado en Derecho, siempre tutelados por profesores y profesionales de las diversas especialidades del Derecho.
3. La finalidad de CLINUCA es, por un lado, completar la formación de los alumnos con la adquisición de valores sociales entrando con contacto con problemas y casos reales; por otro, colaborar con los colectivos más desfavorecidos.
4. Los servicios ofrecidos por CLINUCA son totalmente gratuitos.
5. El carácter no profesional de la Clínica conlleva que no pueda asumir la representación o gestión de asuntos ante instancias judiciales u órganos administrativos ni frente a terceros particulares. En todo caso, será el destinatario del servicio quien, a partir de las posibles soluciones que se le formulen a través de CLINUCA, decida si tiene que dirigirse al profesional que corresponda para la satisfacción de sus intereses.

En conclusión, el servicio de orientación jurídica que se lleva a cabo en la Clínica Jurídica de la Universidad de Cádiz NO es equiparable al que corresponde a un abogado en ejercicio.
6. Las consultas se recibirán mediante el correo electrónico de CLINUCA clinica.juridica@uca.es; cumplimentando el formulario de contacto que puede encontrarse en la web de la Clínica; telefónicamente en el 956 037 894 o, en persona, acudiendo en el horario de atención al público establecido en la página web de la Clínica Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cádiz <https://derecho.uca.es/clinica-juridica/>.
7. Los miembros de la Clínica Jurídica procurarán el buen desarrollo del encargo efectuado. Igualmente, están obligados a respetar el compromiso de confidencialidad de los datos aportados y tienen el deber de secreto profesional respecto de las informaciones y documentación aportadas.
8. Mediante el presente documento el interesado autoriza a la Clínica Jurídica de la



Universidad de Cádiz para que sus datos personales sean tratados de acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Fecha: _____

Firma: _____

4. Carta de confidencialidad CLINUCA



Universidad
de Cádiz



Clínica Jurídica
Facultad de Derecho

Despacho 54, Edificio Servicios Comunes
Avenida de la Universidad, nº 4 | 11.406 Jerez de la Frontera
Tel. 956 037 894
<http://www.uca.es>
clinica.juridica@uca.es

CARTA DE CONFIDENCIALIDAD

En Jerez de la Frontera, a de de 20...

D/D'....., mayor de edad, con DNI....., estudiante de participante en las actividades de la Clínica Jurídica de la Universidad de Cádiz en el curso 20____/2____, mediante la firma del presente escrito, queda informado de que, durante las actividades desarrolladas en el marco de la Clínica Jurídica, podrán manejarse datos personales e información confidencial relativos a terceras personas e instituciones, por lo que se compromete a:

- a. Utilizar dicha información de forma reservada.
- b. No divulgar ni comunicar la información técnica facilitada por la otra parte.
- c. Impedir la copia o revelación de esa información a terceros, salvo que gocen de aprobación escrita de la otra parte, y únicamente en términos de tal aprobación.
- d. No utilizar la información o fragmentos de ésta para fines distintos de la ejecución de este acuerdo.
- e. Guardar secreto sobre cuanta información pudiera recibir o gestionar, así como a aplicar las medidas de seguridad necesarias.
- f. Respeto de los datos de carácter personal protegidos por la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Personales y garantía de los derechos digitales, a los que se tenga acceso durante su participación en la Clínica, a efectuar un uso y tratamiento de los datos afectados acorde a las actuaciones que resulten necesarias para la correcta realización de las actividades de la Clínica y según las instrucciones facilitadas en cada momento por el tutor/coordinador/Director de la Clínica.

Se mantendrá esta confidencialidad y se evitará revelar la información a toda persona ajena, salvo que la información recibida sea de dominio público o proceda de un tercero que no exige secreto.



El incumplimiento de estas obligaciones determinará la depuración por parte de la Universidad de todas las responsabilidades que pudieran derivarse del presente compromiso de confidencialidad y secreto.

Firmado en Jerez de la Frontera, a de de 20....